



TALLER

La Operación Cóndor 40 años después

Las experiencias regionales en el Cono Sur y Brasil

El Plan u Operación Cóndor fue una red secreta de inteligencia instituida por las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en los años 70 con el objetivo de secuestrar, torturar y asesinar a sus opositores políticos en Sudamérica, convirtiéndola en un área de terror e impunidad sin fronteras. Cóndor tuvo su origen en cooperaciones informales y bilaterales entre las Fuerzas Armadas (FFAA) y de seguridad de Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay desde por lo menos 1972; su creación se formalizó posteriormente en una reunión de las FFAA en Santiago de Chile, entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975, organizada por la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA. Entre 1975 y 1981, el Plan Cóndor fue responsable de la desaparición, tortura y asesinato de cientos de refugiados, militantes y líderes políticos. La coordinación represiva desatendió completamente todos los principios del derecho internacional de los refugiados y la larga costumbre de proteger a los exiliados en la región.

1 Taller “A 40 años de la Operación Cóndor”

Al cumplirse los 40 años de del Plan Cóndor, es importante reflexionar sobre los pasos que se han dado en los países de la región para aclarar los crímenes que se cometieron en el marco de la coordinación represiva entre las dictaduras. Además, nos encontramos en una coyuntura crucial: los próximos cinco-diez años serán fundamentales para profundizar y concluir la investigación de esos delitos. Actuar a tiempo será clave.

Por lo tanto, en Montevideo, se organizó una [conferencia](#) para hacer un balance de la situación sobre las causas que investigan los crímenes del Plan Cóndor en Uruguay, Brasil y Argentina, el día 23 de junio de 2016. Además, se llevó a cabo un taller el día 24 de junio con la participación de académicos, abogados, jueces, fiscales, expertos en políticas públicas e integrantes de la sociedad civil para abordar los obstáculos, legales o fácticos, que demoran





o dificultan la investigación de los crímenes de Cóndor y para pensar juntos estrategias y herramientas que se puedan implementar a nivel regional para superarlos, agilizando de tal manera el esclarecimiento de estos delitos en el futuro cercano.

Se tomaron como puntos de partida el juicio Plan Cóndor en Buenos Aires y la causas Cóndor en Chile y en Uruguay. El principal propósito del taller fue discutir los problemas y los desafíos asociados específicamente con la investigación de los crímenes de Cóndor. Si en los años 70 los países de la región se reunieron, a través del Plan Cóndor, para tener una política de coordinación represiva para cometer delitos, ahora, cuarenta años después, es necesario desarrollar políticas públicas a nivel regional con el objetivo de reparar e investigar esos mismos crímenes. Se discutieron preguntas y temas como:

- ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos hasta ahora que han demorado o impedido la investigación?
- ¿Qué implica investigar desde Chile un crimen que se cometió, por ejemplo, en Argentina? (o al revés)
- ¿Qué herramientas necesitan los jueces, abogados, fiscales, para poder hacer de una forma efectiva y satisfactoria su trabajo de investigar crímenes que se cometieron fuera del país?

2 Causas vinculadas con el Plan Cóndor en Argentina y Uruguay

ARGENTINA

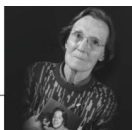
En Argentina se tramitan dos causas judiciales en las que se investiga la coordinación represiva entre las dictaduras de Sudamérica:¹ (a) la causa que investiga a la Operación Cóndor tramita desde 1999, conocida como “**Plan Cóndor**”, y (b) la que remite a un centro clandestino de detención, funcional al accionar conjunto de fuerzas argentinas y uruguayas, conocida como “**Automotores Orletti**,” que fue la sede operativa del Condor en Buenos Aires.

Las investigaciones más avanzadas finalizaron recientemente ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal de Argentina. En ese juicio se abarcaron tres tramos de la causa Plan Cóndor y el segundo tramo de la causa Automotores Orletti.

Las principales características de la causa son:

¹ *La Judicialización de la Operación Cóndor*, Informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Buenos Aires, noviembre de 2015, <http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Proculesa-Op-C%C3%B3ndor-Final.pdf>





- **Universo de 174 víctimas:** 65 corresponden a víctimas de la causa Automotores Orletti II, 107 son víctimas de la Operación Cóndor y 2 son víctimas en las dos causas. Las víctimas son ciudadanos de la mayoría de los países que integraron la Operación Cóndor: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
- **Total de 27 imputados:** Sin embargo, al momento de finalizar el juicios, 17 eran los que continuaban siendo juzgados por su responsabilidad en los hechos, 5 fueron apartados por razones de salud y 5 de ellos fallecieron durante el juicio, entre ellos Jorge Rafael Videla y Jorge Olivera Róvere. De los 27 imputados, 26 son argentinos y uno es uruguayo.² De los 26 imputados argentinos, 24 pertenecieron al Ejército, uno a la Armada, y otro fue Personal Civil de Inteligencia -imputado por la causa Orletti II, Miguel Angel Furci. Hay también un imputado extranjero, el oficial del Ejército de Uruguay, Juan Manuel Cordero, extraditado desde Brasil en 2010.
- **Crímenes investigados:** privaciones ilegales de la libertad cometidas en todos los países de Cóndor, tormentos y también la creación de una asociación ilícita.

El viernes 27 de mayo de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 reconoció la existencia de la asociación ilícita Plan Cóndor y dictó sentencia condenando a 15 de los 17 imputados. Se destacan las sentencias a 25 años de prisión a Santiago Omar Riveros, Miguel Angel Furci, y Juan Manuel Cordero, y de 20 años al ex dictador Reynaldo Benito Bignone. Dos imputados, Juan Avelino Rodríguez y Carlos Tragant, fueron absueltos.

Una parte de la causa Cóndor continúa en etapa de investigación, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°7 y de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10 de la Capital Federal. Actualmente se está investigando a otros 193 imputados por su responsabilidad en los casos de 382 víctimas (348 investigadas por primera vez y 34 cuyo caso es parte del juicio en curso). El total de víctimas de la Operación Cóndor judicializadas en Argentina asciende a 457 casos. El universo de víctimas es de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay e incorpora a ciudadanos/as de Brasil, Alemania y España.

URUGUAY

En Uruguay, según información proporcionada de la base de datos del OLI, se han tramitados 13 causas judiciales (ver Tabla 1 más abajo) para investigar diferentes delitos cometidos por la coordinación represiva entre las dictaduras latinoamericanas. De las 13 causas, cuatro tienen sentencia –algunas ya firmes por haber sido ratificadas por la

² Asimismo, otros 6 imputados uruguayos pertenecientes al Ejército y la Policía Nacional están implicados, pero no podrán ser juzgados en Buenos Aires hasta que cumplan las condenas recibidas en Uruguay.





Suprema Corte de Justicia (SCJ)– mientras que solamente una causa se encuentra en la etapa de sumario. La gran mayoría, siete causas, siguen en presumario y una ha sido archivada por la muerte del único imputado.

Según un informe recientemente compilado por la UNESCO sobre Plan Cóndor, se estima que hubo alrededor de 377 víctimas de la coordinación represiva entre 1974 y 1981; 177 de ellas eran ciudadanos uruguayos, un 47% del total.³ Entonces, los uruguayos constituyen casi la mitad del total de las víctimas de la Operación Cóndor. A pesar de eso, se registra un bajo nivel de judicialización de esos crímenes en Uruguay. Las 13 causas abarcan solamente 111 víctimas, es decir un 63% del total. Además, aun considerando las víctimas que se están judicializando, la gran mayoría no tiene sentencia aun. Las cuatro causas con sentencia abarcan solo a 70 víctimas, un 39.5% del total de las estimadas 177 víctimas uruguayas.

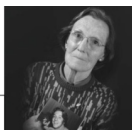
Las causas vinculadas con Cóndor tuvieron, de todos modos, un papel clave en la lucha por la justicia en Uruguay. Es interesante resaltar como la primera denuncia penal por crímenes de la dictadura que se presentó en el país el 22 de febrero de 1984, aun bajo gobierno dictatorial, se refería al secuestro en 1978 en Porto Alegre (Brasil) de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Universindo Rodríguez y Lilian Celiberti, y de los hijos de ella. Otra denuncia emblemática del mismo año, con fecha 12 de abril de 1984, pedía investigar los crímenes cometidos en el ex centro clandestino Automotores Orletti.

Con la sanción por el Parlamento uruguayo de la *Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado*, en diciembre de 1986, los juicios penales se suspendieron por casi 20 años, reanudándose solamente a comienzo de los 2000, gracias a los persistentes esfuerzos de las víctimas, familiares, activistas de derechos humanos y unos pocos abogados patrocinantes.⁴ En ese contexto, los crímenes de Cóndor permitieron abrir brechas en la situación de impunidad absoluta que había existido hasta ese momento. El primer gobierno del Frente Amplio, con el Presidente Tabaré Vázquez (2005-2010), decidió no anular la *Ley de Caducidad*, sino que empezó a aplicarla de forma literal, excluyendo del alcance de la ley, por ejemplo, los crímenes cometidos por los altos mandos, por civiles, la sustracción de menores, y los delitos que ocurrieron en el exterior. De tal forma, investigaciones judiciales empezaron a tramitarse en el país. De hecho, la primer condena de militares y policías vinculados con el régimen dictatorial uruguayo dictada por un juez en el país tuvo lugar en marzo de 2009 y estaba vinculada con hechos delictivos en el marco de Plan Cóndor. El juez Luis Charles condenó en ese entonces a seis ex militares y dos ex policías por 28 delitos de homicidios, contra militantes del PVP secuestrados en Buenos Aires en

³ *Operacion Condor: 40 anos despues*. Centro Internacional para la Promocion de los Derechos Humanos. UNESCO: marzo de 2016, pagina 260, http://www.cipdh.gov.ar/wp-content/uploads/2015/11/Operacion_Condor.pdf

⁴ *Luchas contra la impunidad. Uruguay 1985-2011*. Gabriela Fried, Francesca Lessa, compiladoras. (Trilce: Montevideo, 2011), <http://www.trilce.com.uy/pdf/luchas%20contra%20impunidad.pdf>



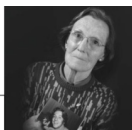


1976. En el mismo año, en octubre de 2009, otra causa Cóndor llevó a la condena del ex dictador Gregorio Álvarez, junto con otro imputado, por 37 homicidios de militantes uruguayos exiliados en Argentina entre 1977 y 1978. Finalmente, en una causa posteriormente archivada por la muerte del único imputado, se procesó en 2010 por primera vez tipificando el delito de desaparición forzada (no homicidio como se había utilizado en los casos anteriores), tipificación ratificada en apelación en 2011.

Tabla 1 – Causas en Uruguay vinculadas con la coordinación represiva

	Caratula caso # expediente	Fecha presentacion	# victimas	# imputados	Delito(s) y fecha(s)	Estado procesal	Países Condor
1	Anatole y Victoria Julién	2008	2		Desaparición forzada, Sustracción de menores 1976	Presumario	ARG URU CHI
2	Antonio Viana	2011	1		Tortura 1974	Presumario	ARG (pre) URU
3	Edison Inzaurrealde y Nelson Santana	28/05/2007	2	1	Desaparición forzada, Privación de libertad 1977	Archivada por muerte imputado	PAR ARG URU
4	Fusilados de Soca	2006	5		Muerte, sustracción de menores y cambio de identidad 1974	Presumario	ARG (pre) URU
5	GAU	2007	37	2	Muerte, Desaparición forzada, Traslado clandestino 1977 y 1978	Sentencia (2009) 2 condenas	ARG URU
6	Hector Giordano	2016	1		Desaparición forzada 1978	Presumario	ARG URU
7	Maria Claudia Gelman	19/06/2002	1	5	Apropiación de menores, Desaparición forzada 1976	Sumario	ARG URU





8	Montoneros	30/04/2012	22		Apropiación de menores, Tortura, Secuestro, Desaparición forzada, Privación de libertad, Asociación para Delinquir, Sustracción de menores 1977	Presumario	URU ARG
9	Orletti (“primer vuelo”)	12/04/1984	25		Tortura, Muerte, Secuestro, Desaparición forzada 1976	Presumario	ARG URU
10	Orletti (Soba y otros)	2006	28	8	Desaparición forzada, Privación de libertad 1976	Sentencia (2009) 8 condenas	ARG URU
11	Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti	22/02/1984	4		Tortura, Secuestro, Privación de libertad 1978	Presumario	BRA URU
12	Washington Barrios	19/09/2005	1	1	Privación de libertad 1974	Acumulada a causa Orletti (Soba y otros)	ARG URU
13	Zelmar Michelini	1985	4	2	Muerte 20/05/1976	Sentencia (2011) 1 condena	ARG URU

Verde = sentencia

Amarillo = sumario

Naranja = presumario

Violeta = archivada

3 Discusión en el Taller

En el taller, nos dividimos en dos grupos de trabajo, de veinte personas en cada grupo, moderados el grupo 1 por Lorena Balardini (UBA) y Francesca Lessa (Oxford), y el grupo 2 por María Florencia González (Ministerio Justicia, Chile) y Raúl Olivera (OLI). En cada grupo la discusión giró alrededor de tres temas principales:

1. *Construcción jurídica de los crímenes transnacionales de Cóndor;*
2. *Equipos y recursos necesarios para investigar los crímenes transnacionales de Cóndor;*





3. Acceso a las pruebas (archivos, información, testigos) y comunicación entre los jueces, fiscales, abogados y organismos de DDHH.

1 Construcción jurídica de los crímenes transnacionales de Cóndor

En relación con este primer tema, se abordaron cuestiones vinculadas con la existencia de códigos penales y procesales pensados para la persecución penal de hechos criminales aislados y puntuales, no de crímenes sistemáticos; y la relación del derecho nacional con los tratados internacionales. En particular, se consideraron en detalle las siguientes problemáticas:

Legislación procesal no pensada para este tipo de juicios y el papel de las víctimas

En Uruguay y Chile, los tipos penales que se utilizan en la investigación de las violaciones de derechos humanos (en el marco de Cóndor o no) son derivados de **códigos penales que investigan delitos comunes, no delitos sistemáticos**. Por lo tanto, los tipos penales a disposición de los operadores judiciales son insuficientes para llevar adelante investigaciones completas sobre crímenes de una naturaleza tan compleja. Además, el hecho de tener que imputar al momento de juicio delitos comunes resulta en penas muy bajas en las sentencias, que no reflejan la gravedad de los crímenes cometidos. Se destacó además, en Uruguay tanto como en Chile, que la tarea de la **recolección y presentación de las pruebas en los juicios siempre ha estado a cargo de las víctimas**, entregándole mucha responsabilidad y sin que el Estado asuma su rol en ese sentido. Las víctimas tienen que brindar su testimonio muchas veces, lo cual provoca su revictimización y también causando problemas de recursos y de tiempo. Las víctimas tienen que aportar prueba pero, luego, no pueden tener un papel activo en las causas en Uruguay, donde no existe la figura de querellante como en Argentina. Por esa razón, se quiere impulsar un proyecto de ley para la participación de la víctima en las causas judiciales. Además de la invisibilización de las víctimas en el proceso penal en sí, existe también una **invisibilización del género en los tipos penales aplicados**. Por ejemplo, en la causa de violencia sexual denunciada por 28 mujeres en 2011 en Montevideo, la jueza solamente solicitó el procesamiento en 2016 por privación de libertad, sin incluir ni tortura ni violación. La Fiscal apeló el procesamiento, considerando que el imputado tiene que ser juzgado también por tortura.⁵

Derecho internacional y derecho nacional: tipificación de los crímenes y prescripción

En Uruguay, existen en la legislación nacional desde el 2006, los delitos de desaparición forzada y de tortura; algunos fiscales y jueces sostuvieron que esos delitos se podían aplicar para investigar los crímenes de la dictadura y de Cóndor. La Constitución de Uruguay, a pesar de su antigüedad, posee el artículo 72 que permite integrar los tratados internacionales al derecho nacional. Por lo tanto, la base legal de poder aplicar el derecho internacional en

⁵ "Fiscal apeló procesamiento de ex militar Lucero por "privación de libertad," *Busqueda*, 24 de mayo de 2016, <http://www.busqueda.com.uy/nota/fiscal-apelo-procesamiento-de-ex-militar-lucero-por-privacion-de-libertad-afirma-que-tambien>





Uruguay no resulta ser el problema principal, sino cuanto la interpretación llevada adelante por los operadores judiciales cuando se enfrentan a este tipo de delitos e investigaciones. Algunos de ellos han luchado a lo largo de los años para sostener que los tratados de derechos humanos son aplicables en el país para poder aclarar los crímenes cometidos. A pesar de eso, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha desestimado en todos los casos el pedido de **tipificación del crimen** de desaparición forzada, utilizando las calificaciones de privación de libertad o de homicidio. Es una batalla jurídica que continúa.

Además de la tipificación del delito, otro tema vinculado con el derecho internacional es la **calificación de delitos de lesa humanidad**. La prescripción como instrumento de extinción de la acción penal es un tema de debate en Uruguay hoy: si la aplicación de la prescripción prevista para delitos comunes debería aplicarse en estos casos, o si primaría la imprescriptibilidad dispuesta desde el derecho internacional. A nivel de la Fiscalía de Uruguay, se han manejado dos soluciones posibles, no complementarias, pero se plantean ambas como reaseguro: una es la suspensión del plazo de prescripción; otra es la imprescriptibilidad de los delitos. La primera posición constituye una postura limitada, que no aborda adecuadamente el fenómeno de los crímenes de lesa humanidad, porque no los considera como crímenes imprescriptibles. Sostiene que, debido a la vigencia de la Ley de Caducidad entre 1986 y 2011, el plazo de prescripción solo se tiene que computar del 2011 en adelante, porque solo después de esa fecha se estuvo en condiciones de ejercer la persecución penal. La segunda acepta la calificación de estos delitos como crímenes de lesa humanidad y por lo tanto nunca sujetos a prescripción. El sistema judicial reacciona de forma diferente a estos planteos. Por un lado, las instancias judiciales inferiores son más receptoras de las posturas de derecho internacional y de la imprescriptibilidad; la SCJ y la apelación son menos permeables a argumentos de derecho internacional. En particular, la SCJ sostiene una posición anticuada y conservadora en relación al tema.

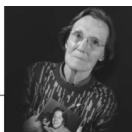
2 *Equipos y recursos para investigar los crímenes transnacionales de Cóndor*

En relación con el segundo tema, se consideraron temas vinculados con la importancia de crear equipos multidisciplinarios para investigaciones exitosas de esos crímenes y mejorar las redes formales que permitan el intercambio de información como política de estado. En particular, se consideraron en detalles las siguientes problemáticas:

Falta de voluntad de investigar y de políticas de estado

En el caso de Uruguay, es urgente generar una estrategia concreta para llevar adelante las investigaciones nacionales de los crímenes, en la cual debe participar el Estado. Muchos de los participantes subrayaron la inexistencia de una política de Estado sobre estos temas en el país y la necesidad de generar voluntad política es fundamental para llevar adelante las investigaciones. En primer lugar, la información recopilada no es aprovechada ni utilizada de forma correcta. Los cambios de Gobierno, también cambian las políticas





públicas, sin que exista una visión de Estado en la materia, que persista y que las mantenga más allá del partido político que se encuentre en el gobierno. Un ex fiscal reseñó como, al momento de investigar crímenes de Cóndor contra ciudadanos uruguayos en Argentina, la cooperación con sus colegas argentinos fue fundamental para aportar datos, información de los expedientes, y para diligenciar los exhortos. Pero todo eso se logró por redes informales, y por esfuerzos personales, no por recibir y contar con recursos del Estado uruguayo. Otro abogado relató como al presentar una denuncia de víctimas de Cóndor argentinas en Uruguay, tuvieron muy poca colaboración por parte de las autoridades uruguayas, un hecho que impactó negativamente también con la Embajada argentina, la cual estaba dispuesta a ayudar pero finalmente no pudo. Los participantes coincidieron en que es necesario desarrollar redes formales y que los funcionarios públicos puedan brindar información para incorporarla a las causas. Sostuvieron que no es posible seguir trabajando con las buenas voluntades de las contrapartes de los otros Estados y de manera informal. Es sumamente necesario generar mecanismos que permitan intercambiar información, hacer consultas y monitorear los tiempos de respuesta. Existen varios memorándum de entendimiento sobre el intercambio de información como el *Memorándum de Entendimiento entre La República Argentina y La República Oriental del Uruguay para el Intercambio de Documentación para el Esclarecimiento de Graves Violaciones a los Derechos Humanos* de diciembre de 2012. Tales convenios y redes de cooperación deberían ser fortalecidas y aprovechadas de mejor forma.

Equipos multidisciplinarios

La principal recomendación fue conformar equipos multidisciplinarios para poder apoyar las investigaciones, en los que participen médicos forenses especializados, antropólogos, abogados, historiadores, psicólogos, etc. Los equipos confirmados en la actualidad no cumplen con las necesidades, en particular el Equipo del Ministerio del Interior en Uruguay. En Argentina, por ejemplo, fue necesario generar equipos interdisciplinarios que permitieran leer todos los antecedentes que eran parte de las investigaciones. Si bien el testimonio era el eje central de las pruebas, encontrar nuevas pruebas documentales obligó a los actores a superar nuevos desafíos, que finalmente terminaron en generar equipos interdisciplinarios. Otro tema que también surgió en relación a Uruguay, es que no existe el acompañamiento a víctimas. Esto genera la revictimización de las mismas en muchas oportunidades. Se necesita la institucionalización del acompañamiento y se podría lograrlo en parte, incorporando a estos equipos de trabajo a psicólogos y asistentes sociales.

3 Acceso a las pruebas y comunicación entre los jueces, fiscales, abogados y organismos de DDHH

En relación con el tercer y último tema, se examinaron las siguientes problemáticas:





Acceso a la información y a los archivos

Varios de los participantes resaltaron la dificultad de tener acceso a la información y a los archivos especialmente. No existen mecanismos reales que garanticen el acceso a la información. En Uruguay, el Estado hizo poco en este ámbito y lo poco que logró fue gracias al esfuerzo de la sociedad civil. La Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (SDHPR), por ejemplo, respondió a varios exhortos y participo en 6 causas internacionales, aportando la documentación. La documentación y los informes periciales de la SDHPR, para identificar de qué tipo de información se trata, han ofrecido un corpus sistematizado que permite relacionar la lógica represiva del Estado más allá del caso a caso. Y acompañan los testimonios que estaban solitarios en las voces de los sobrevivientes. Es posible que la lógica de los jueces este más enfocada hacia los testimonios que en la explicación historiográfica. Pero, la documentación aporta elementos de convicción para ayudar a formar la opinión de los jueces. Respecto de la función de aportar la documentación, un experto remarcó los siguientes problemas y dificultades prácticas: (a) los exhortos llegan de diferentes canales y eso genera una dificultad para instrumentar la respuesta; (b) la autenticación de los documentos por la Escribanía General de la Nación; ese proceso se hace uno a uno aunque sean 100, lleva un tiempo enorme; (c) dificultad de acceder a la información de los juicios para poderlas usar en otros países. En Uruguay hay directorios sobre 19 archivos y tres leyes que regulan el tema de los archivos. Lo que falta es un protocolo de acceso a los archivos, porque hasta ahora investigadores y abogados casi no han podido consultar y utilizar a esa documentación. En Brasil, el Colegio de Abogados tiene quinientos mil documentos digitalizados sobre diversos temas de interés para el colegio profesional y la Comisión de Amnistía y la Comisión de Muertos y Desaparecidos también digitalizó la información que recopilaron, quizás podría servir como base para generar cooperación en materia de digitalización de documentos.

Falta de especialización y capacitación

Bajo este rubro, se resaltaron dos temas en particular. Por un lado, una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), subrayó la necesidad de **capacitar a los funcionarios públicos que tengan que trabajar en este tema**, para sensibilizarlos. En el caso del MRREE, la transnacionalización de la justicia requiere que los funcionarios diplomáticos estén a la altura de esa tarea. Por ejemplo, la Cancillería ha tenido un rol en el juicio Cóndor que se desarrolla en Italia. Pero el funcionario que recibe al testigo tiene que tener sensibilidad y conocimiento, que no sea por voluntad propia, sino por haber tenido capacitación en derechos humanos. Por otro lado, varios participantes resaltaron como **la justicia en Uruguay no tiene investigadores, ni fiscalías especializadas**, sino que son los mismos funcionarios que atienden delitos comunes los que investigan casos de crímenes contra la humanidad. En general, existe por lo tanto una falta de especialización en estos temas y no hay instituciones equivalentes, por ejemplo, a la *Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad* del Ministerio Público Fiscal de Argentina. En octubre de





2015, en Uruguay, se creó la Unidad Especializada en Derechos Humanos,⁶ para capacitar a los fiscales sobre el contexto histórico y político de la dictadura. Aunque es un paso importante, no parece ser suficiente sino se establecerán además de esa capacitación histórica y políticas, estrategias y líneas institucionales de investigación y capacitación sobre los delitos para investigar.

4 Pasos por seguir

Después del trabajo en grupos, todos los participantes se reunieron en una sesión plenaria donde se acordaron las siguientes **dos recomendaciones** y propuestas para agilizar la investigación y el juzgamiento de los casos Cóndor:

1. Creación de *equipos dedicados a investigar las causas de derechos humanos*: estos equipos se pueden crear al interior de los juzgados, y de otras instituciones a nivel judicial. Dada la naturaleza de los crímenes, además de contar con personal de la dependencia, deberían ser multidisciplinarios, con la participación en particular de historiadores, antropólogos, médicos legales y forenses, y analistas de archivos para apoyar la investigación documental de los hechos y posiblemente de psicólogos para el acompañamiento de los testigos y víctimas;
2. Generar *una base de datos* con información de las causas y que permitan la interacción y traspaso de antecedentes entre los Jueces y los Fiscales. Para ello es necesario digitalizar los documentos y antecedentes recopilados, y coordinar formas de acceso a la información.

⁶ “La suma de los factores,” *La Diaria*, 30 de octubre de 2015, <http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/10/la-suma-de-los-factores/>





WORKSHOP

Forty years on from Operation Condor

Comparative Experiences in the Southern Cone and Brazil

Conclusions

The so-called Plan or Operation Condor was a secret intelligence network set up by the dictatorships of Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay and Uruguay in the 1970s in order to illegally detain, torture, and, very often, murder political opponents all across South America, turning the region into a borderless area of terror and impunity. Condor emerged from informal bilateral forms of cooperation among the armed and security forces of Argentina, Paraguay, Chile and Uruguay as early as 1972. Condor was later formally created at a meeting of intelligence and security forces organised by the Chilean National Intelligence Directorate (DINA) and held in Santiago, Chile, between November 25 and December 1, 1975. Between 1975 and 1981, Plan Condor facilitated the perpetration of disappearances, kidnappings and murder of hundreds of political leaders, activists and refugees. The transnational repressive coordination completely disregarded all principles of international law on refugees and the long custom of protecting exiles in South America.

1 Rationale behind the Workshop

The year 2015 marked the fortieth anniversary of the Plan Condor founding meeting. At that juncture, it became important to reflect on the steps taken and progress made in South America to try to shed light on the crimes perpetrated by the repressive coordination of the dictatorships. In addition to that, the next five to ten years will be key in order to move ahead with the criminal investigation of those very crimes. Time is of the essence.





For all these reasons, in addition to the [conference](#) organised on June 23, 2016, to evaluate the status of criminal trials probing Plan Condor crimes in Uruguay, Brazil, and Argentina, a workshop was also held the following day with the participation of academics, lawyers, judges, prosecutors, public policy experts and members of civil society. The key objective was to identify and discuss the obstacles -both legal and factual- which delay or prevent the investigation of transnational crimes and to generate potential strategies and tools together to be implemented on a regional level to overcome them, thus favouring accountability in the near future.

The starting point for the workshop debate was the Plan Condor trial in Buenos Aires and similar lawsuits investigating Operation Condor in Chile and Uruguay. The main goal was to discuss the problems and challenges specifically associated with the investigation of Condor crimes. If in the 1970s the countries of this region were able to work together through Plan Condor to coordinate their repressive policies to jointly carry out atrocities, nowadays it is fundamental to develop public policies at a regional level in order to repair and redress those same crimes. The following questions and topics were considered at the workshop:

- What were the major obstacles that have delayed or obstructed accountability?
- What are the challenges and difficulties for judicial operators in Chile who have to investigate a crime committed in Argentina? Or vice versa?
- What tools do judges, lawyers and prosecutors require to conduct effective and efficient investigations into wrongdoings committed outside their own country?

2 Summary of Judicial Proceedings on Plan Condor in Argentina and Uruguay

ARGENTINA

In Argentina, there are currently two judicial proceedings investigating the repressive coordination among the South American dictatorships:¹ (a) the lawsuit that is investigating operation Condor since 1999, known as “**Plan Cóndor**”, and (b) the one relating to a secret detention centre where Argentine and Uruguayan security forces operated from, known as “**Automotores Orletti**,” the name of the detention site.

¹ *La Judicialización de la Operación Cóndor*, Informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Buenos Aires, noviembre de 2015, <http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Proculesa-Op-C%C3%B3ndor-Final.pdf>





The proceedings that have made most progress to date are the ones before Federal Criminal Tribunal 1 in Buenos Aires. The trial encompassed three segments of the Plan Condor lawsuit and one of the Automotores Orletti investigation. Here are some key features of the trial:

- **Total of 174 victims:** 65 relate to Automotores Orletti, while 107 are victims of operation Condor and two are victims in both lawsuits. The victims are citizens of the majority of the countries that composed Operation Condor: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Peru and Uruguay;
- **Total of 27 defendants:** 17 were eventually left by the time the trial ended; five were exonerated due to ill health, while five passed away during the trial, including former dictator, Jorge Rafael Videla. Of the original 27 defendants, 26 were Argentinian and one Uruguayan. Among the 26 Argentinian defendants, 24 belonged to the Army, one to the Navy and one was a civilian intelligence officer, charged in the Automotores Orletti part of the trial. The only foreign defendant is a retired officer of the Uruguayan army, Juan Manuel Cordero, extradited from Brazil in 2010.
- **Crimes:** illegal detentions and torture as well as the creation of a joint criminal enterprise.

In a historic verdict, delivered on May 27, 2016, the Tribunal considered that Plan Condor constituted a joint criminal enterprise and condemned 15 of the 17 defendants in the case, with sentences ranging from 8 to 25 years. For example former Argentine dictator Reynaldo Benito Bignone received 20 years, while Uruguayan Juan Manuel Cordero and former Argentine general Santiago Omar Riveros 25 years. Two defendants, Juan Avelino Rodríguez y Carlos Tragant, were acquitted.

A portion of the Condor lawsuit continues to be probed in the pre-trial stage at Federal Criminal Tribunal 7 and Criminal Federal Prosecutor 10. This investigation encompasses approximately 193 defendants for their responsibility in the cases of 382 victims (348 being investigated for the first time and 34 already examined in previous trials). The total number of victims of Operation Condor under judicial investigation in Argentina reaches a total of 457 cases. The cases include victims from Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Peru and Uruguay, and also citizens from Brazil, Germany and Spain.²

² Data taken from the report: *La Judicialización de la Operación Cóndor*, Informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Buenos Aires, noviembre de 2015, <http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2015/11/Informe-ProcuLes-a-Op-C%C3%B3ndor-Final.pdf>





URUGUAY

In Uruguay, according to information provided by the Observatorio Luz Ibarburu (OLI) database, 13 criminal proceedings (see Table 1 for details) have investigated different crimes committed by the repressive coordination among the Latin American dictatorships. Out of the 13 cases, four have concluded – with some verdicts already upheld by the Supreme Court of Justice (SCJ), while only one case is currently at the trial stage. The vast majority, seven cases, remain in pre-trial stage and one has been shelved due to the death of the only defendant in the case.

According to a report recently compiled by UNESCO, there were approximately 377 victims of Operation Condor between 1974 and 1981; 177 of them were Uruguayan citizens, constituting 47% of the total. This means that Uruguayans constitute almost half of the total number of Operation Condor victims. In spite of that, there has been a low level of prosecution of those crimes in Uruguay. The 13 criminal proceedings only encompass 111 victims, i.e. 63% of the total. In addition, even considering the cases of victims who are currently being probed by the judiciary, the vast majority of the proceedings is still in the pre-trial phase. The four trials that have concluded covered only 70 victims, 39.5% of the total estimated Uruguayan Condor victims.

Condor related criminal proceedings have, nonetheless, played a key role in the struggle for justice in Uruguay. It is interesting to note that the first criminal complaint for crimes of the dictatorship that was filed in the country at the time of the transition to democracy on February 22, 1984 – still under the dictatorial rule – related to the kidnapping in 1978 in Porto Alegre (Brazil) of two activists of the Party for the Victory of the People (PVP), Universindo Rodríguez and Lilian Celiberti, together with Lilian's two children. Another emblematic lawsuit filed that same year, on April 12, 1984, requested that the judiciary investigate the crimes committed in the former clandestine centre known as *Automotores Orletti*.

After the Uruguayan Parliament sanctioned the Expiry Law, in December 1986, criminal trials were suspended for nearly 20 years; these resumed only in the 2000s, owing to persistent efforts by victims, family members, human rights activists and a few sponsoring attorneys.³ The investigation of Condor crimes allowed for some openings and advances vis-à-vis the situation of absolute impunity that had existed up till then. The first government of the Broad Front, with President Tabaré Vázquez (2005-2010), decided not to annul the Expiry Law, but began applying it literally, excluding from its scope, for example, crimes committed by the high command, by civilians, offences such as the illegal appropriation of minors, and crimes committed abroad. In light of this new

³ Burt, Jo-Marie, Gabriela Fried Amilivia, and Francesca Lessa. 2013. "Civil Society and the Resurgent Struggle against Impunity in Uruguay (1986–2012)." *International Journal of Transitional Justice* 7 (2): 306–27; Francesca Lessa. 2013. *Memory and Transitional Justice in Argentina and Uruguay: Against Impunity*. New York: Palgrave Macmillan





application of the law, judicial investigations begun to make some progress in the country.

Indeed, the first sentence of military and police linked to the dictatorial regime handed down in March 2009 was linked to criminal acts committed within the framework of Condor. Judge Luis Charles condemned six former military officials and two ex-police officers for 28 homicides, perpetrated against militants of the PVP kidnapped in Buenos Aires in 1976. That same year, in October 2009, another trial linked to Condor offences led to the conviction of former military dictator Gregorio Alvarez, together with another defendant, for 37 killings between 1977 and 1978 of Uruguayan militants in exile in Argentina. Finally, in a lawsuit subsequently archived due to the death of the only accused, the categorization of enforced disappearance - not murder as used in the previous two cases - was accepted in 2010 for the first time; this characterization was later ratified on appeal too in 2011.

Table 1 – Condor related Criminal Proceedings in Uruguay

	Case file name	Date filed	# victims	# defendants	Crime(s) and date(s)	Status	Condor countries
1	Anatole and Victoria Julián	2008	2		Enforced disappearance, appropriation of minors 1976	Pretrial	ARG URU CHI
2	Antonio Viana	2011	1		Torture 1974	Pretrial	ARG (pre) URU
3	Edison Inzaurrealde and Nelson Santana	28/05/2007	2	1	Enforced disappearance, kidnapping 1977	Shelved	PAR ARG URU
4	Fusilados de Soca	2006	5		Murder, appropriation of minors, identity theft 1974	Pretrial	ARG (pre) URU
5	GAU	2007	37	2	Murder, enforced disappearance, refolement 1977 y 1978	Verdict (2009) 2 sentenced	ARG URU
6	Hector Giordano	2016	1		Enforced disappearance 1978	Pretrial	ARG URU
7	Maria Claudia Gelman	19/06/2002	1	5	Appropriation of minors, enforced disappearance 1976	Trial	ARG URU





8	Montoneros	30/04/2012	22		Appropriation of minors, torture, kidnapping, enforced disappearance, kidnapping, joint criminal enterprise, appropriation of minors 1977	Pretrial	URU ARG
9	Orletti (“primer vuelo”)	12/04/1984	25		Torture, murder, kidnapping, enforced disappearance 1976	Pretrial	ARG URU
10	Orletti (Soba and others)	2006	28	8	Enforced disappearance, kidnapping 1976	Verdict (2009) 8 sentenced	ARG URU
11	Universindo Rodríguez and Lilián Celiberti	22/02/1984	4		Torture, kidnapping 1978	Pretrial	BRA URU
12	Washington Barrios	19/09/2005	1	1	Kidnapping 1974	Joined to Orletti (Soba and others)	ARG URU
13	Zelmar Michelini	1985	4	2	Murder 20/05/1976	Verdict (2011) 1 sentenced	ARG URU

Verde = sentencia
Amarillo = sumario

Naranja = presumario
Violeta = archivada

3 Workshop Discussion

After a brief introduction by Dr Francesca Lessa, we split into two groups with 20 participants in each. The discussion was led by project consultant Lorena Balardini (University of Buenos Aires) and Dr Lessa, and Maria Florencia Gonzalez (Ministry of Justice, Chile) and Raul Olivera (OLI). In each group, the discussion was framed around three key themes:

1. *Juridical Construction of Operation Condor Transnational Crimes;*
2. *Necessary Resources to Investigate Operation Condor Transnational Crimes;*
3. *Access to Evidence and Communication among Judges, Prosecutors, Lawyers and Civil Society.*





1 *Juridical Construction of Operation Condor Transnational Crimes*

Regarding this first issue, the following themes were tackled: the existence of criminal and procedural codes intended for the prosecution of isolated and sporadic criminal acts, not systematic crimes; and the relationship of domestic law with international treaties. In particular, these problems were considered in detail:

Procedural law not intended for this type of trial and the role of victims

In Uruguay and Chile, **the criminal codes used to investigate human rights violations (whether committed within Condor or not) are the same ones that are employed to probe common crimes, not systematic offences.** Therefore, the criminal codes and legal categories available to judicial operators are insufficient and inadequate to carry out comprehensive investigations of crimes of such a complex nature. In addition, the fact of having to indict for common crimes often results in rather lenient sanctions at the sentencing stage, which do not match the gravity of the crimes committed. It was also stressed that, in Uruguay as well as in Chile, **the task of gathering and presenting proof and evidence during trials always fell upon the victims**, placing a huge burden on them, whereas the State has never assumed its responsibility in that respect. The victims have to provide testimony many times, which results in their revictimization and also causes problems of resources and time. Victims play a central role in feeding evidence to criminal proceedings but, then, they cannot play an active part during the trial phase itself in Uruguay, where the figure of private prosecutor does not exist, as it does in Argentina. Thus, there is an ongoing effort to push through a legislative bill that would permit victim participation in court proceedings. In addition to the invisibility of victims in the criminal process itself, **the issue of gender and gender specific violence remains invisible when looking at the crimes brought.** For example, in a case investigating the sexual violence suffered and denounced by 28 women in Montevideo, the judge only requested the indictment for the crime of deprivation of liberty, failing to include torture or rape. The Prosecutor has appealed the indictment, considering that the accused also has to be prosecuted for torture.⁴

International and national law: the characterization of the crimes and prescription

In Uruguay, the crimes of enforced disappearance and torture exist within national legislation since 2006. Some prosecutors and judges have argued that these legal categories could be used to investigate the crimes of the dictatorship and of Condor. Moreover, article 72 of the Constitution of Uruguay allows for international treaties to be applied as if they were part of national law. Therefore, **the legal basis to apply international law in Uruguay is not the main problem, but rather, the bigger obstacle seems to be the interpretation adopted by several judicial officials when**

⁴“Fiscal apeló procesamiento de ex militar Lucero por “privación de libertad.” *Busqueda*, 24 de mayo de 2016, <http://www.busqueda.com.uy/nota/fiscal-apelo-procesamiento-de-ex-militar-lucero-por-privacion-de-libertad-afirma-que-tambien>





confronted with these types of crimes and investigations. Some of them have fought throughout the years to support the claim that the human rights law should be applied in the country to probe the crimes. In spite of that, the Supreme Court of Justice (SCJ) has rejected in all instances the use of the category of forced disappearance, sentencing instead for deprivation of freedom or murder. It is a juridical battle that endures. In addition to the definition of the offense, another issue linked to international law is **the qualification of an act as a crime against humanity**. Statutes of limitations, as tools to extinguish criminal actions, are a subject of debate in Uruguay today: whether such statutes for common crimes should be applied in these cases, or if the imprescriptibility of these crimes under international law should prevail. Within Uruguay's Public Prosecutor Office, two possible solutions are adopted; they are non-complementary but are both raised at the same time as back-ups: one is the suspension of the limitations' period; the other is the non-applicability of statutory limitations. The first position is limited and fails to adequately address the phenomenon of crimes against humanity, for failing to consider them as imprescriptible. It maintains that, due to the existence of the Expiry Law between 1986 and 2011, the limitations' period only has to be counted from 2011, because only after that date criminal prosecutions could take place. The Expiry Law was derogated in October 2011. The second accepts the qualification of these crimes as crimes against humanity and therefore never subject to prescription. The judicial system has reacted differently to these arguments. On the one hand, lower courts have adopted more favourable stances towards arguments applying international law and the non-applicability of statutory limitations; on the other, the SCJ and the appeal courts are less permeable to those arguments. In particular, the SCJ maintains an outdated and conservative position on the topic.

2 *Necessary Resources to Investigate Operation Condor Transnational Crimes*

As regards this second them, the key topics considered related to the importance of creating multidisciplinary teams for the successful investigation of the crimes and of improving the formal networks that allow the information exchange as a state policy. In particular, the following matters were addressed in detail:

Unwillingness to investigate and state policies

In Uruguay, a solid and sustained strategy to conduct national investigations of crimes, in which the State must actively participate, needs to be urgently created. Many of the participants emphasised the absence of a state policy in the country in this respect. Political will to carry out the investigations is essential. First, the information collected is not fully exploited or used correctly. Second, with changes of Government, there is also a change in public policies, without there being a vision about the subject that persists beyond the political party that is in government at any given time. A former prosecutor outlined how, when she was investigating Condor crimes against Uruguayan citizens in





Argentina, cooperation with her Argentine colleagues was fundamental to obtaining data, information, dossiers, and in filing rogatory letters. But all of this was achieved largely through informal networks, and thanks to her own personal efforts, not because the State provided any resources or support in that respect. Another lawyer recounted how, when they filed a case relating to Argentine victims of Condor in Uruguay, they received very little cooperation from the Uruguayan authorities, something that also negatively impacted on their relation with the Argentine Embassy, which was willing to help but finally was unable to do so. The participants agreed that it was necessary to develop formal networks and that civil servants should provide information for direct incorporation into criminal proceedings. Participants also argued that it was no longer possible to work just with the goodwill of counterparts within each state and through informal networks. Rather, it is extremely necessary to generate formal mechanisms to exchange information, to present data requests, and monitor response times to such requests. There are several memorandums of understanding on the exchange of information, such as the *Memorandum of Understanding between the Republic Argentina and the Oriental Republic of Uruguay to Exchange Documentation to Clarify Serious Human Rights Violations* of December of 2012. Such conventions and cooperation networks should be strengthened further.

Multidisciplinary Teams

The main recommendation was to set up multidisciplinary teams to support investigations, encompassing forensic doctors, anthropologists, lawyers, historians, psychologists, etc. Current teams do not meet the needs, in particular the team in the Ministry of the Interior in Uruguay. In Argentina, for example, it was necessary to establish interdisciplinary teams that were allowed to read and understand all the files that composed the investigations. While the testimony was the core of the evidence and for the accusation, finding new documentary evidence forced actors to overcome new challenges, which finally ended with the creation of interdisciplinary teams. Another issue that also emerged in relation to Uruguay was that there is no policy to accompany to victims when they have to give testimony before the courts. This can result in many opportunities for their revictimization. A policy of victim support should be institutionalised and this could also be partly achieved, by incorporating psychologists and social workers into the proposed multidisciplinary teams.⁵

⁵ Similar interdisciplinary teams have existed in the past such as, for example, with the Colloquium for Actors involved in Reparations, organised by the University of the Republic, which brought together human rights organizations, State institutions, academics and professionals (such as the history research group, the forensic anthropology group, the Institute of Health Psychology, and the Mental Health and Human Rights Cooperative). These could serve as a model for future initiatives, using existing professionals but not just in an *ad hoc* and temporary fashion as has been the case in the past, but rather by institutionalising them as permanent teams such as in Argentina when Ulloa Institute, which provides victim support, was established. In Uruguay, this could be set up with members of the Human Rights and Psychology Programme at the Institute of Health Psychology.





3 *Access to Evidence and Communication among Judges, Prosecutors, Lawyers and Civil Society*

With regard to the third and final topic, the following two issues were debated in detail:

Access to Information and Archives

Many of participants particularly emphasised the difficulty of accessing information and files. There are no real mechanisms that guarantee access to information. In Uruguay, the State has done very little in this area and what has been achieved so far is mainly owing to the efforts of civil society. The Secretary of Human Rights for the Recent Past (SDHPR, Spanish abbreviation), for example, responded to several rogatory letters and participated in six international cases, providing documentation. The documentation and reports presented by the SDHPR constituted a systematised set of documents that set out the State's repressive logic beyond individual cases of crimes. The documentation supported and sustained the often lonely voices of survivors. It is highly likely that the logic of the judges focuses more on testimonies rather than historical explanations. But the records still provided key elements to shape the opinion of the judges. With regard to this documentation function, an expert highlighted the following problems and practical difficulties: (a) the international rogatory letters come from different channels and that generates a difficulty in properly answering them; (b) the authentication of the documents for the General Clerkship of the Nation; this process has to be carried out for each document and is very time consuming; (c) the difficulty of gaining access to the information on the judgments in other countries. In Uruguay there are directories on 19 archives and three laws governing the questions of archives. What is missing is a protocol to ensure access to archives; until now researchers and lawyers have hardly been able to consult and use this documentation. In Brazil, the Bar Association has 500,000 documents digitized on various topics of interest and the Amnesty Commission and the Commission of Dead and Missing also made electronic copies of the information collected; perhaps this could serve as a basis to generate cooperation in the field of documentation and digitization.

Lack of Specialization and Training

Under this heading, two issues were highlighted in particular. On the one hand, an official of the Ministry of Foreign Affairs (MRREE), stressed **the need to train public officials who have to work on this issue, to sensitise them to this complex subject**. In the case of the MRREE, the transnationalisation of justice requires that diplomats rise to the challenge of the task. For example, the MRREE played a role in the Condor trial in Italy. But the official who deals with a witness has to be sensitive and knowledgeable, not out of his/her own goodwill, but by having been trained specifically in human rights. On the other hand, several participants highlighted how, **within the Uruguayan judiciary, there are no researchers, or special prosecutors**, but rather the same officials who deal with common crimes are the ones who have to investigate allegations of crimes against





humanity. In general, there is therefore a lack of expertise on these issues and there are no equivalent institutions, for example, to the Office of the Attorney for Crimes against Humanity in the Public Prosecutor Office of Argentina. In October 2015, in Uruguay, a Special Human Rights Unit was set up to train public prosecutors on the historical and political context of the dictatorship.⁶ Although this is an important step, it does not seem to be sufficient if it is not accompanied by the development of institutional strategies to investigate and provide further training on these crimes.

4 Next Steps

After the group discussion, there was a concluding plenary session. The following two proposals were agreed, with the objective being to push ahead with the investigation and eventual prosecution of Condor cases:

1. The creation of ***teams exclusively dedicated to investigating human rights lawsuits***: these could be established within tribunals, the public prosecutor's office or other offices within the judiciary. In light of the complexities surrounding these cases, in addition to personnel from the office in which they are to be established, they will also be of a multidisciplinary nature, with the participation, in particular, of historians and document analysts to support the analysis of archival evidence and documents, anthropologists, forensic doctors, and psychologists to accompany and provide support to victims and witnesses;
2. Setting up a ***regional database*** containing information on the trial proceedings and archival documents, that would allow judges, lawyers, civil society activists, and prosecutors to access all these records. In order to do this, it will be necessary to gather, compile and digitalize (where not already done so) all the documents and records, as well as develop and coordinate ways of accessing the information so that it can be incorporated in the legal proceedings.

⁶ "La suma de los factores," *La Diaria*, 30 de octubre de 2015, <http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/10/la-suma-de-los-factores/>





ATELIER

L'Operation Condor 40 ans après

Les expériences régionales du Cône Sud et du Brésil

Le Plan ou Opération Condor a constitué un réseau secret de renseignement institué par les dictatures d'Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Chili, du Paraguay et d'Uruguay dans les années 1970 ayant pour objectif la séquestration, la torture et l'assassinat de leurs opposants politiques en Amérique du Sud, faisant de cette région un espace de terreur et d'impunité sans frontières. Le Plan Condor trouve son origine dans des coopérations informelles et bilatérales des Forces Armées et de Sécurité argentines, paraguayennes, chiliennes et uruguayennes au moins depuis 1972 ; sa création se formalisant postérieurement lors de la réunion des Forces Armées de Santiago du Chili du 25 novembre au 1^{er} décembre 1975, organisée par la Direction Nationale du Renseignement Chilien (DINA). Entre 1975 et 1981, le Plan Condor a été responsable de la disparition, la torture et l'assassinat de centaines de réfugiés, militants et leaders politiques. La coordination répressive a complètement méconnu tous les principes de droit international des réfugiés ainsi que la longue coutume de protection des exilés de la région.

1. Atelier "A 40 ans de l'Opération Condor"

A 40 ans du Plan Condor, il est important de réfléchir sur le chemin parcouru par les pays de la région pour éclaircir les crimes commis dans le cadre de la coordination répressive des dictatures. D'autant plus que nous nous trouvons dans une conjoncture cruciale : les cinq-dix prochaines années seront fondamentales pour approfondir et conclure les enquêtes sur ces crimes. Agir à temps sera clé.

De ce fait, a été organisée à Montevideo le 23 juin 2016 une [conférence](#) visant à effectuer un bilan de la situation sur les affaires dont l'enquête porte sur les crimes du Plan Condor en Uruguay, au Brésil et en Argentine. D'autre part, le 24 juin a été mené un atelier comptant sur la participation d'universitaires, d'avocats, de juges, de procureurs, d'experts





en politiques publiques et de membres de la société civile pour aborder les obstacles légaux et effectifs qui retardent ou rendent difficiles les enquêtes sur les crimes du Condor et réfléchir conjointement à des stratégies et des outils pouvant être mis en place au niveau régional afin de les dépasser, en facilitant de cette façon l'éclaircissement de ces crimes dans un futur proche.

Le point de départ des discussions est constitué par le procès Plan Condor de Buenos Aires et les affaires Condor au Chili et en Uruguay. L'objectif principal de cet atelier a été de discuter des problèmes et défis associés spécifiquement aux enquêtes des crimes du Condor. Si dans les années 1970 les pays de la région se sont réunis au travers du Plan Condor afin d'avoir une politique de coordination répressive pour commettre des crimes, aujourd'hui, à quarante ans des faits, il est nécessaire qu'ils développent des politiques publiques au niveau régional ayant pour objectif la réparation et l'éclaircissement de ces mêmes crimes. Les questions et thèmes de discussions ont été, entre autres :

- Quels ont été les obstacles les plus importants jusqu'à aujourd'hui ayant retardé ou empêché les enquêtes ?
- Qu'implique le fait d'enquêter depuis le Chili sur un crime commis, par exemple, en Argentine (ou le contraire) ?
- De quels outils les juges, avocats, procureurs, ont-ils besoin pour pouvoir effectuer de façon efficace et satisfaisante leur travail d'enquête sur les crimes commis en dehors des frontières du pays ?

2 Affaires liées au Plan Condor en Argentine et en Uruguay

ARGENTINE

En Argentine sont en cours deux affaires judiciaires dans lesquelles l'enquête porte sur la coordination répressive des dictatures sudaméricaines :¹ (a) l'affaire enquêtant sur l'Opération Condor ouverte en 1999 connue comme « **Plan Condor** » et (b) l'affaire portant sur un centre de détention clandestin fonctionnel à l'action conjointe des forces argentines et uruguayennes, connue comme « **Automotores Orletti** », siège de l'Opération Condor à Buenos Aires.

Les enquêtes les plus avancées ont été présentées récemment devant le Tribunal Oral Fédéral N°1 de la Capitale Fédérale de l'Argentine. Ce procès comprenait trois volets de l'affaire Plan Condor et le second volet de l'affaire Automotores Orletti.

¹ *La Judicialización de la Operación Cóndor*, Informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Buenos Aires, novembre de 2015, <http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Proculesa-Op-C%C3%B3ndor-Final.pdf>





Les principales caractéristiques de l'affaire sont les suivantes:

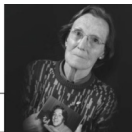
- **Univers de 174 victimes:** 65 correspondent à des victimes de l'affaire Automotores Orletti II, 107 sont des victimes de l'affaire Opération Condor y 2 sont victimes dans les deux affaires. Les victimes sont en majeure partie des citoyens des pays membres de l'Opération Condor : Argentine, Bolivie, Chili, Paraguay, Pérou et Uruguay.
- **Total de 27 personnes mises en examen:** Cependant, à la fin du procès, 17 seulement étaient encore jugées pour leur responsabilité dans les faits imputés, 5 personnes ont été écartées pour raisons de santé et 5 sont décédées au cours du procès, entre autres, Jorge Rafael Videla et Jorge Olivera Róvere. Sur les 27 personnes mises en examens, 26 sont argentines et une est uruguayenne.² Sur les 26 mis en examen argentins, 24 appartiennent à l'Armée, un à la Marine et un autre a été Personnel Civil des Renseignements –mis en examen dans l'affaire Orletti II, Miguel Angel Furci. Pour ce qui est de l'inculpé étranger, il s'agit de l'officier de l'Armée uruguayenne Juan Manuel Cordero, extradé depuis le Brésil en 2010.
- **Crimes examinés:** privations illégales de la liberté commises dans tous les pays du Condor, tortures et également création d'une association de malfaiteurs (asociación ilícita)..

Le vendredi 27 mai 2016, le Tribunal Oral Pénal Fédéral N°1 a reconnu l'existence de l'association de malfaiteurs Plan Condor et prononcé sa décision condamnant 15 des 17 personnes mises en examen. Peuvent être soulignées les condamnations à 25 ans de prison de Santiago Omar Riveros, Miguel Angel Furci et Juan Manuel Cordero et à 20 ans pour l'ex dictateur Reynaldo Benito Bignone. Deux mis en examen, Juan Avelino Rodriguez et Carlos Tragant ont été acquittés.

Une partie de l'affaire Condor est encore en phase d'enquête, sous la juridiction du Tribunal Pénal Correctionnel Fédéral N°7 (Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°7) et du Parquet National Pénal Correctionnel N°10 de la Capitale Fédérale (Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10). Actuellement l'enquête porte sur les cas de 193 autres mis en examen pour leur responsabilités à l'égard de 382 victimes (348 cas en première enquête et 34 cas faisant partie du procès en cours). Le total des victimes de l'Opération Condor judiciairisées en Argentine s'élève à 457 cas, avec un univers de victimes argentines, boliviennes, chiliennes, paraguayennes, péruviennes et uruguayennes incorporant également des citoyen-ne-s brésilien-ne-s, allemand-e-s et espagnol-e-s.

² De même, 6 autres mis en examen uruguayens appartenant à l'Armée et à la Police Nationale sont impliqués mais ne pourront être jugés à Buenos Aires avant d'avoir purgé leur peine prononcée en Uruguay.





URUGUAY

En Uruguay, selon les informations dont dispose la base de données de l'OLI, 13 affaires en cours (voir ci-dessous Tableau 1) enquêtent sur les différents crimes commis dans le cadre de la coordination répressive des dictatures latino-américaines. Dans 4 de ces 13 affaires, le jugement a déjà été rendu –quelques-unes de ces décisions étant fermes puisqu'elles ont été ratifiées par la Cour Suprême de Justice (SCJ)- alors qu'une décision de mise en accusation n'a été prononcée que dans une seule affaire, la grande majorité des affaires (7) sont encore à l'état de pré-instruction et une a été archivée du fait du décès de l'unique personne mise en examen.

Selon un rapport récemment réalisé par l'UNESCO sur le Plan Condor, le nombre de victimes de la coordination répressive entre 1974 et 1981 est estimé à environ 377 ; 177 d'entre elles étant des citoyens uruguayens, soit 47% du total.³ De ce fait, les Uruguayens constituent presque la moitié du total des victimes du Plan Condor. Malgré cela, on constate un bas niveau de judiciarisation de ces crimes en Uruguay. Les 13 affaires mentionnées comprenant seulement les cas de 111 victimes, c'est à dire 63% du total. D'autre part, même en prenant en compte les victimes dont les cas sont judiciarisés, dans la grande majorité des cas les concernant, aucune décision n'a été prononcée. Les 4 affaires dans lesquelles un verdict a été prononcé concernent seulement 70 victimes, soit 39,5% du total de 177 victimes uruguayennes.

Les affaires liées au Plan Condor ont eu, quoiqu'il en soit, un rôle clé dans la lutte pour la justice en Uruguay. Il est intéressant de souligner que la première plainte pénale pour des crimes de la dictature pendant la transition à la démocratie, présentée le 22 février 1984, fait référence à la séquestration en 1978 à Porto Alegre (Brésil) des militants du Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Universindo Rodriguez et Lilian Celiberti et des enfants de celle-ci. Une autre plainte emblématique datant de la même année, plus précisément du 12 avril 1984, visait à enquêter sur les crimes commis dans l'ex centre de détention clandestin Automotores Orletti.

Après la sanction par le Parlement uruguayen de la *Loi de Caducité de la Prétention Punitiva de l'État* en décembre 1986, les procès pénaux ont été suspendus pendant une vingtaine d'années, reprenant seulement au début des années 2000, grâce aux efforts persistants des victimes, de leurs proches, d'activistes défenseurs des droits de l'Homme et de quelques avocats les représentant.⁴ Dans ce contexte, les crimes du Condor ont permis d'ouvrir des brèches dans la situation d'impunité absolue qui existait jusqu'alors. Le premier gouvernement du Frente Amplio du Président Tabaré Vazquez (2005-2010), a

³ *Operacion Condor: 40 anos despues*. Centro Internacional para la Promocion de los Derechos Humanos. UNESCO: marzo de 2016, pagina 260, http://www.cipdh.gov.ar/wp-content/uploads/2015/11/Operacion_Condor.pdf

⁴ *Luchas contra la impunidad. Uruguay 1985-2011*. Gabriela Fried, Francesca Lessa, compiladoras. (Trilce: Montevideo, 2011), <http://www.trilce.com.uy/pdf/luchas%20contra%20impunidad.pdf>





décidé de ne pas annuler la Loi de Caducité, mais d’en proposer une application littérale (ou, perforatrice), excluant du cadre de la loi, par exemple, les crimes commis par les hauts responsables et les civils, les crimes tels l’enlèvement de mineurs ainsi que les crimes commis à l’étranger. De cette façon, des enquêtes judiciaires ont commencé à être menées dans le pays. De fait, la première décision de condamnation de militaires et policiers liés au régime dictatorial uruguayen rendue par un juge a eu lieu en mars 2009 et était en lien avec des faits commis dans le cadre du Plan Condor. Le juge Luis Charles a alors condamné 6 anciens militaires et deux anciens policiers pour 28 assassinats commis contre des militants du PVP séquestrés à Buenos Aires en 1976 (Affaire « Second vol », Automotores Orletti ou Soba et autres). La même année, en octobre 2009, une autre affaire Condor a mené à la condamnation de l’ex dictateur Gregorio Alvarez et d’une autre personne mise en examen, pour 37 homicides de militants uruguayens exilés en Argentine entre 1977 et 1978 (Affaire « Troisième vol » ou GAU). Finalement, dans une affaire postérieurement archivée du fait du décès de l’unique personne mise en examen, a eu lieu en 2010 la première mise en examen utilisant la qualification pénale de disparition forcée (et non d’homicide, tel que cela avait été utilisé dans les cas antérieurs), qualification ratifiée en appel en 2011.

Tableau 1 – Affaires liées à la coordination répressive en Uruguay

	Titre du cas/dossier	Date de présentation	# victimes	# mis en examen	Crime(s) et date(s)	Etat d’avancement	Pays Condor
1	Anatole et Victoria Julién	2008	2		Disparitions forcées, Enlèvement de mineurs 1976	Préinstruction	ARG URU CHI
2	Antonio Viana	2011	1		Torture 1974	Préinstruction	ARG (pre) URU
3	Edison Inzaurrealde et Nelson Santana	28/05/2007	2	1	Disparition forcée, Privation de liberté 1977	Archivée du fait de la mort de l’inculpé	PAR ARG URU
4	Fusilados de Soca	2006	5		Mort, Enlèvement de mineurs et soustraction d’identité 1974	Préinstruction	ARG (pre) URU
5	GAU (“Troisième	2007	37	2	Mort, Disparition	Jugement (2009)	ARG





	Vol")				forcé, Transfert clandestin 1977 y 1978	2 condamnations	URU
6	Hector Giordano	2016	1		Disparition forcé 1978	Préinstruction	ARG URU
7	Maria Claudia Gelman	19/06/2002	1	5	Enlèvement de mineurs, Disparition forcée 1976	Mise en examen	ARG URU
8	Montoneros	30/04/2012	22		Enlèvement de mineurs, Torture, Séquestration, Disparition forcée, Privation de liberté, Association de malfaiteurs 1977	Préinstruction	URU ARG
9	Automotores Orletti ("Premier vol")	12/04/1984	25		Torture, Mort, Séquestration, Disparition forcée 1976	Préinstruction	ARG URU
10	Automotores Orletti ("Segundo Vuelo" ou Soba et autres)	2006	28	8	Disparition forcé, Privation de liberté 1976	Jugement (2009) 8 condamnations	ARG URU
11	Universindo Rodríguez et Lilián Celiberti	22/02/1984	4		Torture, Séquestration, Privation de liberté 1978	Préinstruction	BRA URU
12	Washington Barrios	19/09/2005	1	1	Privation de liberté 1974	Ajouté à l'affaire Orletti (Soba et autres)	ARG URU
13	Zelmar Michelini	1985	4	2	Mort 20/05/1976	Jugement (2011) 1 condamnation	ARG URU

Vert = Verdict et condamnation
Jaune = Mise en examen

Rose = Préinstruction
Violet = Archive

3 Discussion de l'Atelier

Pendant l'atelier, nous nous sommes divisés en deux groupes de travail, de vingt personnes chacun, le groupe 1 étant modéré par Lorena Balardini (UBA) et Francesca Lessa (Oxford) et le groupe 2 par María Florencia González (Ministère de la Justice, Chili) et Raúl





Olivera (OLI). Au sein de chaque groupe, la discussion s'est centrée sur trois thèmes principaux :

1. *Construction juridique des crimes transnationaux du Condor;*
2. *Équipes et recours nécessaires à l'enquête des crimes transnationaux du Condor ;*
3. *Accès aux preuves (archives, information, témoins) et communication entre les juges, procureurs, avocats et organismes de défense des droits de l'Homme.*

1 Construction juridique des crimes transnationaux du Condor

Sur ce premier thème, les questions abordées sont en lien, d'une part, avec l'existence de codes pénaux et de procédures pensés pour les poursuites pénales de faits criminels isolés et ponctuels, et non de crimes systématiques; et, d'autre part, avec la relation du droit national aux traités internationaux. En particulier, la réflexion a considéré les problématiques suivantes :

Législation de procédure pénale non pensées pour ce type de procès et Rôle des victimes

En Uruguay et au Chili, les qualifications pénales utilisées dans les affaires relatives aux violations des droits de l'Homme (perpétrées dans le cadre du Condor ou non) viennent de **codes pénaux prévus pour des crimes communs et non des crimes systématiques**. De ce fait, les qualifications à disposition des opérateurs judiciaires sont insuffisantes pour mener à bien des enquêtes complètes sur des crimes d'une nature si complexe. De plus, le fait d'avoir à inculper au moment du procès des crimes communs se répercute sur les peines prononcées, très basses, qui ne reflètent pas la gravité des crimes commis. On relève également qu'en Uruguay aussi bien qu'au Chili, **la tâche de recueil et présentation des preuves lors des procès a toujours été à la charge des victimes**, faisant reposer sur elles une énorme responsabilité et sans que l'État n'assume son rôle en ce sens. Les victimes doivent apporter leur témoignage à de nombreuses reprises, ce qui provoque leur revictimisation et occasionne également des problèmes de ressources et de temps. Les victimes doivent apporter des preuves mais ne peuvent par la suite pas avoir un rôle actif dans les affaires en Uruguay, où la figure de partie civile n'existe pas comme c'est en revanche le cas en Argentine. C'est pour cette raison que la présentation d'un projet de loi pour la participation de la victime dans les affaires judiciaires est envisagée. Outre l'invisibilisation des victimes dans le procès pénal en lui-même, il existe également une **invisibilisation de genre dans les qualifications pénales appliquées**. Par exemple, dans l'affaire des violences sexuelles dénoncées par 28 femmes en 2011 à Montevideo, la juge a sollicité la mise en examen pour privation de liberté sans inclure ni la torture ni le





viol. Le Procureur a fait appel de cette décision considérant que la personne mise en examen doit également répondre des faits de tortures.⁵

Droit international et droit national: la qualification des crimes et la prescription

En Uruguay, les crimes de disparition forcée et de torture existent dans la législation nationale depuis 2006; quelques procureurs et juges ont soutenu que ces crimes pouvaient être appliqués pour enquêter sur les crimes de la dictature et du Condor. Dans la Constitution uruguayenne, malgré son ancienneté, figure l'article 72 qui permet d'intégrer les traités internationaux au droit national. De ce fait, la base légale d'application du droit internationale n'est pas le problème principal : c'est bien l'interprétation qu'en font les opérateurs judiciaires quand ils se trouvent face à ce type de crimes et d'enquêtes qui en est la source. Quelques-uns d'entre eux ont lutté pendant de nombreuses années pour soutenir que les traités internationaux de droits de l'Homme sont applicables nationalement pour pouvoir éclaircir ces crimes. Malgré cela, **la Cour Suprême de Justice a toujours rejeté la demande de qualification du crime de disparition forcée** en utilisant les qualifications de privation de liberté et d'homicide. C'est une bataille juridique qui se poursuit.

Un autre thème en lien avec le droit international tient à la **qualification des crimes contre l'humanité**. La prescription en tant qu'instrument d'extinction de l'action pénale est un thème de débat en Uruguay aujourd'hui : si l'application de la prescription prévue pour les crimes communs doit s'appliquer à ces cas ou si prime l'imprescriptibilité dont dispose le droit international. Au niveau du Ministère Public uruguayen, deux solutions possibles ont été envisagées, sans qu'elles soient complémentaires mais constituant à elles-deux une double assurance : l'une tient à la suspension du délai de prescription ; l'autre à l'imprescriptibilité des crimes. La première position constitue une position limitée puisqu'elle n'aborde pas de manière adéquate le phénomène de crime contre l'humanité en ne le considérant pas comme crime imprescriptible. Elle soutient que du fait que la Loi de Caducité était en vigueur entre 1986 et 2011, le délai de prescription doit être calculé seulement à partir de 2011 parce que c'est seulement après cette date que les conditions d'exercice des poursuites pénales ont été réunies. La seconde position accepte la qualification de ces crimes comme crimes contre l'humanité et, en tant que tels, jamais sujets à prescription. Le système judiciaire réagit de différentes manières à ces arguments. D'un côté, les instances judiciaires inférieures sont plus réceptives aux postures revendiquant l'application du droit international et l'imprescriptibilité ; de l'autre, la Cour Suprême de Justice et les tribunaux de seconde instance sont moins perméables à ces arguments. La Cour Suprême en particulier maintient une position obsolète et conservatrice vis-à-vis de ce problème.

⁵ "Fiscal apeló procesamiento de ex militar Lucero por "privación de libertad," *Busqueda*, 24 de mayo de 2016, <http://www.busqueda.com.uy/nota/fiscal-apelo-procesamiento-de-ex-militar-lucero-por-privacion-de-libertad-afirma-que-tambien>





2 *Équipes et recours pour enquêter sur les crimes transnationaux du Condor*

Par rapport à ce second thème, il est en lien avec l'importance de créer des équipes multidisciplinaires pour le succès des enquêtes relatives à ces crimes ainsi que l'amélioration des réseaux formels qui permettent l'échange d'information comme politique de l'État. Les problématiques suivantes ont été considérées en particulier :

Manque de volonté d'enquêter et de politiques d'État

Dans le cas de l'Uruguay, il est urgent de générer une stratégie concrète afin de mener à bien les enquêtes nationales sur ces crimes, à laquelle doit participer l'État. Nombre de participants ont souligné l'inexistence d'une politique d'État sur ces thèmes et la nécessité de générer une volonté politique est fondamentale pour mener à bien les enquêtes. En premier lieu, l'information consignée n'est pas utilisée ni employée correctement. Les changements de gouvernements impliquent également des changements en termes de politiques publiques sans qu'existe une vision d'État en la matière qui persiste ou subsiste au-delà du parti politique qui se trouve alors au gouvernement. Un ancien fiscal a raconté comment, au moment d'enquêter sur les crimes du Condor commis à l'encontre de citoyens uruguayens en Argentine, la coopération avec ses collègues argentins a été fondamentale pour apporter des informations sur les cas ou les dossiers et pour instruire les demandes d'informations. Mais tout cela n'a été possible que grâce à des réseaux informels et aux efforts personnels, et non pas du fait d'un quelconque soutien de l'État uruguayen. Un avocat raconte combien, pour présenter une plainte de victimes argentines du Condor en Uruguay, la collaboration reçue de la part des autorités uruguayennes a été faible, ce qui a également eu un impact négatif auprès de l'Ambassade argentine, disposée à offrir son aide sans finalement pouvoir le faire. Les participants sont d'accord sur la nécessité de développer des réseaux formels et d'inclure la possibilité que les fonctionnaires publiques apportent des informations pour les incorporer aux dossiers. Ils ont soutenu qu'il était impossible de continuer à travailler sur la base des bonnes volontés des autres États et de manière informelle. Il est fondamentalement nécessaire de générer des mécanismes qui permettent l'échange d'information, la réalisation de consultation et le suivi des temps de réponse. Il existe de nombreux mémorandums d'entente sur l'échange d'information comme le *Mémorandum d'entente entre la République Argentine et la République Orientale d'Uruguay pour l'Échange de Documentation pour l'Éclaircissement des Graves Violations des Droits de l'Homme* de décembre 2012. De tels accords et réseaux de coopération devraient être fortifiés et employés de meilleure façon.

Équipes multidisciplinaires

La recommandation principalement faite tient à la formation d'équipes multidisciplinaires qui puissent soutenir les enquêtes, auxquelles participent des médecins





légistes spécialisés, des anthropologues, des avocats, des historiens, des psychologues, etc. Les équipes formées actuellement n'ont pas les compétences requises, en particulier l'Équipe d'enquête du Ministère de l'Intérieur en Uruguay. En Argentine, par exemple, il a été nécessaire de générer des équipes interdisciplinaires qui permettent de lire tous les antécédents faisant partie des dossiers d'enquête. Quoique le témoignage ait été l'axe central des preuves, trouver de nouvelles preuves documentaires a obligé les acteurs à relever de nouveaux défis qui ont finalement générer des équipes interdisciplinaires.

Un autre problème ayant émergé à propos de l'Uruguay réside en l'inexistence d'accompagnement des victimes. Cela génère la revictimisation de celles-ci en de nombreuses occasions. Il est nécessaire d'institutionnaliser l'accompagnement et cela pourrait se faire partiellement en incorporant à ces équipes le travail de psychologues et d'assistants sociaux.⁶

3 *Accès aux preuves et communication entre les juges, les procureurs, les avocats et les organismes de défense des droits de l'Homme*

Par rapport au troisième et dernier thème ont été examinées les problématiques suivantes:

Accès à l'information et aux archives

Plusieurs des participants ont souligné les difficultés rencontrées pour avoir accès aux informations et spécialement aux archives. Il n'existe pas de mécanismes réels qui garantissent l'accès à l'information. En Uruguay, l'État a peu œuvré dans ce domaine et le peu ayant été fait en la matière l'a été grâce aux efforts de la société civile. Le Secrétariat des Droits de l'Homme pour le Passé Récent (SDHPR), par exemple, a répondu à de nombreuses demandes d'informations et participé à 6 affaires internationales en apportant de la documentation. La documentation et les rapports d'experts du SDHPR, pour identifier de quel type d'information il s'agissait, ont offert un corpus systématisé qui permet de mettre en relation la logique répressive de l'État au-delà du cas par cas. Ils accompagnent les témoignages solitaires des voix des survivants. Il est possible que la logique des juges soit plus centrée sur les témoignages que sur l'explication historiographique. Mais la documentation apporte des éléments de preuve

⁶ On peut rappeler que de telles initiatives de formations d'équipes interdisciplinaires ont existé –en témoignent notamment les Journées de Dialogue des acteurs de la Réparation Intégrale organisées par l'Université de la République, réunissant organismes de défense des droits de l'Homme, institutions étatiques, universitaires et professionnels (tels que le Groupe d'Investigations Historiques, le Groupe d'Investigations en Anthropologie Médico Légale, l'Institut de Psychologie de la Santé, la Coopérative Santé Mentale et Droits de l'Homme...). Ces initiatives pourraient être utilisées comme modèles pour le futur, en comptant sur les équipes professionnelles déjà existantes, non plus sur un modèle de formation *ad hoc*, comme cela a pu être le cas par le passé, mais en instaurant un modèle de collaboration permanente, comme cela s'est fait, par exemple dans le cadre de l'accompagnement des victimes en Argentine avec l'Institut Ulloa et pourrait être envisagé en Uruguay avec les membres du Programme Psychologie et Droits de l'Homme de l'Institut de Psychologie de la Santé.





qui contribuent à la formation de l'opinion des juges. Par rapport à la fonction de l'apport de documentation, un expert a souligné les problèmes et difficultés pratiques suivantes : (a) les demandes d'informations arrivent par différents canaux ce qui génère des difficultés au moment d'instruire une réponse ; (b) l'authentification des documents par la Escribanía General de la Nación s'effectue un à un même s'il y en a 100 ce qui prend un temps énorme ; (c) les difficultés d'accès à l'information des procès pour les utiliser dans d'autres pays.

En Uruguay il y a 19 archives répertoriées et 3 lois en régissent l'accès. Il manque un protocole d'accès aux archives parce que, jusqu'alors, les chercheurs et avocats n'ont pratiquement pas pu consulter ni utiliser ces documents. Au Brésil, le Collège des Avocats possède cinq cent mille documents digitalisés sur différents thèmes d'intérêts pour le collège professionnel et la Commission d'Amnistie et la Commissions des Morts et Disparus ont digitalisé l'information recueillie par leur soin, ce qui pourrait peut-être servir de base pour générer une coopération en matière de digitalisation de documents.

Manque de spécialisation et de formation

Sous cette dénomination ont été particulièrement soulignées deux problématiques. D'un côté, une fonctionnaire du Ministère des Relations Extérieures a souligné la nécessité de **former les fonctionnaires publics qui doivent travailler sur ce thème afin de les sensibiliser**. Dans le cas du Ministère des Relations Extérieures, la transnationalisation de la justice requiert que les fonctionnaires diplomatiques soient à la hauteur de cette tâche. Par exemple, la Chancellerie a eu un rôle dans le procès Condor en cours en Italie. Mais le fonctionnaire qui reçoit les témoins doit avoir une formation en droits de l'Homme. D'un autre côté, plusieurs participants ont souligné le fait que, comme **la justice uruguayenne n'a ni enquêteurs ni procureurs spécialisés**, ce sont les mêmes fonctionnaires qui traitent les délits communs et les crimes contre l'humanité. En général, il existe donc un manque de spécialisation sur ces thématiques et pas d'institution équivalentes, par exemple, au *Parquet des Crimes contre l'Humanité* du Ministère Public d'Argentine. En octobre 2015 a été créé en Uruguay l'Unité Spécialisée en Droits de l'Homme⁷ afin de former les procureurs sur le contexte historique et politique de la dictature. Même s'il s'agit d'un pas important, cela ne semble pas suffisant sans que ne s'établissent, en plus de cette formation historique et politique, des stratégies et lignes institutionnelles d'enquête et de formation sur les crimes sur lesquels enquêter.

4 Etapes à suivre

Après le travail en groupes, tous les participants se sont réunis en session plénière afin de définir les **deux recommandations suivantes** et des propositions pour faciliter l'enquête et le procès des affaires Condor :

⁷ "La suma de los factores," *La Diaria*, 30 de octubre de 2015, <http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/10/la-suma-de-los-factores/>

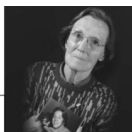




1. Création d'équipes dédiées à l'enquête des affaires de droits de l'Homme: ces équipes peuvent être créées au sein des tribunaux et d'autres institutions au niveau judiciaire. Etant donné la nature des crimes, en plus de compter sur le personnel normal de chacun, elles devraient être multidisciplinaires et compter sur la participation, en particulier, d'historiens, d'anthropologues, de médecins légistes et d'archivologues pour appuyer l'enquête documentaire des faits et de psychologues pour accompagner témoins et victimes.
2. Générer une base de données avec des informations sur les affaires qui permette l'interaction et l'échange d'antécédents entre les Juges et les Procureurs. Pour cela, il est nécessaire de digitaliser les documents et antécédents recueillis et de coordonner les formes d'accès à l'information.

Traduit en français par Lauriane Bouvet





WORKSHOP

40 Anos da Operação Condor

Justiça Sem Fronteiras

Conclusões

O Plano ou Operação Condor foi uma rede secreta de inteligência instituída pelas ditaduras da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai nos anos 70, que tinha como objetivo sequestrar, torturar e assassinar seus opositores políticos na América do Sul, transformando a referida região em uma área de terror e impunidade sem fronteiras.

Condor teve sua origem em cooperações informais e bilaterais entre as Forças Armadas e de segurança da Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai, desde, pelo menos, 1972. Sua criação foi formalizada posteriormente em uma reunião das Forças Armadas, em Santiago de Chile, entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro de 1975, organizada pela Direção Nacional de Inteligência (DINA).

Entre 1975 e 1981, o Plano Condor foi responsável pelo desaparecimento, tortura e assassinato de centenas de refugiados, militantes e líderes políticos. A coordenação repressiva ignorou completamente todos os princípios do direito internacional dos refugiados e o consagrado costume de dar proteção a exiliados na região.

1 *Workshop “40 Anos da Operação Condor”*

Ao completar 40 anos desde a reunião de criação do Plano Condor, é importante refletir sobre os passos que foram dados nos países da região para esclarecer os crimes que foram cometidos no âmbito da cooperação repressiva entre as ditaduras. Além disso, estamos em uma conjuntura crucial: os próximos cinco a dez anos serão fundamentais para aprofundar e concluir a investigação desses crimes. Agir a tempo será fundamental.

Desse modo, em Montevideu, foi organizada uma conferência, no dia 23 de junho de 2016, para fazer um balanço da situação das investigações dos crimes praticados na execução do





Plano Condor no Uruguai, Brasil, e Argentina. Além disso, foi realizado um *workshop*, no dia 24 de junho, com a participação de acadêmicos, advogados, juízes, membros do Ministério Público, especialistas em políticas públicas e integrantes da sociedade civil, para abordar os obstáculos, legais ou fáticos, que atrasam ou dificultam a investigação dos crimes da Operação Condor, bem como para pensar, juntos, estratégias e ferramentas que possam ser implementadas, em nível regional, a fim de superá-los e, assim, agilizar o esclarecimento desses crimes no futuro próximo.

Foram tomados, como pontos de partida, o processo sobre a Operação Condor em Buenos Aires e o processo *Condor* no Chile e os juízos em Uruguai. O principal objetivo do *workshop* foi discutir os problemas e os desafios associados, especificamente, com a investigação dos crimes praticados na execução da Operação Condor. Se, nos Anos 70, os países da região se reuniram, por meio do Plano Condor, para realizar uma política de coordenação repressiva para cometer crimes, agora, depois de quarenta anos, é necessário desenvolver políticas públicas, em nível regional, com o objetivo de reparar e investigar esses crimes. Foram discutidos perguntas e temas como:

- Quais têm sido os maiores obstáculos, até agora, que atrasam ou impedem a investigação?
- Quais são as implicações de se investigar, no Chile, um crime que foi cometido, por exemplo, na Argentina? (ou o inverso)?
- Que ferramentas juízes, advogados e promotores necessitam para poderem fazer, de forma efetiva e satisfatória, o trabalho de investigar crimes que foram cometidos fora do país?

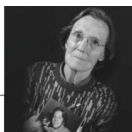
2 *Causas Operação Condor na Argentina e no Uruguai*

ARGENTINA

Na Argentina, tramitam dois processos judiciais em que se investiga a coordenação repressiva entre as ditaduras da América do Sul:¹ (a) o processo que investiga a Operação Condor tramita desde 1999, conhecido como “**Plan Cóndor**”; e (b) o que se refere a um centro clandestino de detenção, funcional ao acionar um conjunto de forças argentinas e uruguaias, conhecido como “**Automotores Orletti**”

¹ *A Judicialização da Operação Condor*, Relatório da Procuradoria de Crimes contra a Humanidade, Buenos Aires, novembro de 2015





As investigações mais avançadas estão perante a Tribunal Criminal Federal nº. 1, da Capital Federal. Nesse juízo, encontram-se três etapas do caso *Plan Cóndor* e a segunda etapa do caso *Automotores Orletti*.

As principais características do processo são:

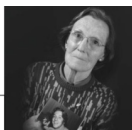
- **Universo de 174 vítimas:** 65 correspondem a vítimas da causa Automotores Orletti II, 107 são vítimas da Operação Condor e 2 são vítimas nos dois processos. As vítimas são cidadãos em maior parte dos países que integraram a Operação Condor: Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai;
- **Total de 27 réus:** No entanto, 17 são os que foram julgados por sua responsabilidade nos fatos, 5 foram separados por razões de saúde e 5 deles faleceram durante o processo judicial, entre eles Jorge Rafael Videla e Jorge Olivera Róvere. Dos 27 réus, 26 são argentinos e um é uruguaio.² Dos 26 réus argentinos, 24 pertenciam ao Exército, um às Forças Armadas, e outro foi funcionário civil de Inteligência – acusado no caso *Orletti II*, Miguel Angel Furci. Há também um réu estrangeiro, o oficial do Exército do Uruguai, Juan Manuel Cordero, extraditado do Brasil em 2010.
- **Crimes investigados:** privações ilegais da liberdade cometidas em todos os países do Condor, tortura e também a criação de uma associação ilícita.

Na sexta-feira, 27 de maio de 2016, o *Tribunal Oral do Crime Federal Nº1* da Capital Federal reconheceu a existência da associação ilícita da Operação Condor e promulgou a sentença de condenação para 15 dos 17 acusados. Destacam-se as sentenças de 25 anos de prisão para Santiago Omar Riveros, Miguel Angel Furci e Juan Manuel Cordero, e, também a condenação a 20 anos de prisão para o ex ditador Reynaldo Benito Bignone. Foram absolvidos dois acusados: Juan Avelino Rodríguez e Carlos Tragant.

Uma parte do caso *Condor* continua em etapa de investigação sob responsabilidade da Vara Criminal e Correccional Federal nº 7 e da Procuradoria da República Criminal e Correccional Federal nº. 10, da Capital Federal. Atualmente, estão sendo investigados outros 193 réus por sua responsabilidade nos casos de 382 vítimas (348 investigadas pela primeira vez e 34 cujo caso faz parte do processo em curso). O total de vítimas da Operação Condor judicializadas na Argentina chega a 457 casos. O universo de vítimas abrange vítimas da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai e incorpora cidadãos(ãs) do Brasil, Alemanha e Espanha.

² Da mesma forma, outros 6 réus uruguaios pertencentes ao Exército e a Polícia Nacional estão envolvidos, mas não poderão ser julgados em Buenos Aires até que cumpram as condenações recebidas no Uruguai.





URUGUAI

No Uruguai, segundo informações que constam na base de dados do OLI, foram tramitados 13 processos judiciais (ver Tabela 1 abaixo) para investigar crimes diversos cometidos pela coordenação repressiva no período das ditaduras latino-americanas.

Em relação aos 13 processos, quatro já têm sentença, e, alguns processos têm sentenças firmes que já tinham sido ratificadas pela Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Sete processos, ou seja, a maior parte deles continuam na etapa de pré-sumário. Somente um processo está na etapa de sumário. Sete processos, isto é, a maior parte deles continuam na etapa de pré-sumário e um deles foi arquivado devido a morte do único processado acusado.

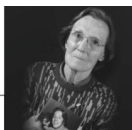
De acordo com um relatório compilado recentemente pela UNESCO sobre a Operação Condor, fez-se uma estimativa do número de vítimas da coordenação repressiva: aproximadamente 377 vítimas dos fatos ocorridos entre 1974 e 1981. Dessas vítimas, 177 eram cidadãos de nacionalidade uruguaia, ou seja, 47% do total.³ Isso, significa que os uruguaio compõem quase a metade do total das vítimas da Operação Condor. Apesar disso, um baixo nível de instrução penal desses crimes é registrado no Uruguai. Os 13 casos reúnem apenas 111 vítimas, ou seja, somente 63% do total. Além disso, mesmo que se considere as vítimas que abriram processos (que ainda se estão judicializando), a grande maioria ainda não tem sentença. Os quatro processos com sentença ditada reúnem somente 70 vítimas, ou melhor, 39,5% do total aproximado das 177 vítimas uruguaio do Condor.

Mesmo assim, considera-se que os processos vinculados com a operação Condor, tem um papel fundamental na luta pela justiça no Uruguai. É interessante salientar que a primeira denúncia penal por causa dos crimes praticados pela ditadura foi apresentada no país, no dia 22 de fevereiro de 1984, e que ainda estava sob um governo ditatorial. Essa denúncia, refere-se ao sequestro dos militantes: Universindo Rodríguez e Lilian Celiberti, e dos filhos dele. Eles integravam o Partido pela Vitória do Povo (PVP), esse fato ocorreu em Porto Alegre (Brasil), em 1978. No dia 12 de abril, desse mesmo ano outras denúncias representativas e importantes foram feitas pedindo para investigar os crimes cometidos no ex centro de detenção clandestina Automotores Orletti.

Através da sanção do Parlamento uruguaio da *Ley de Caducidad da Pretensión Punitiva do Estado*, em dezembro de 1986, os processos penais foram suspensos por quase 20 anos, e, só foram retomados no início de 2000, graças aos esforços constantes das vítimas, dos

³ *Operacion Condor: 40 anos despues*. Centro Internacional para la Promocion de los Derechos Humanos. UNESCO: marzo de 2016, pagina 260, http://www.cipdh.gov.ar/wp-content/uploads/2015/11/Operacion_Condor.pdf





familiares, dos ativistas dos direitos humanos e dos poucos advogados defensores da causa.⁴ Por isso, e, nesse contexto, os crimes cometidos pela operação Condor permitiram abrir frentes nas situações de impunidade absoluta que existia até então.

O primeiro governo da Frente Ampla (2005 -2010), através do Presidente Tabaré Vázquez, decidiu não somente não anular a *Ley de Caducidad*, como também começou a aplicá-la literalmente. Dessa forma, pôde excluir da abrangência das leis, por exemplo, os crimes cometidos por pessoas de altos cargos e também por civis. Além disso, os crimes de sequestro de crianças, e, também os crimes que ocorreram no exterior. Assim as investigações judiciais começaram a ser tramitados no país.

Em março de 2009, ocorreu, de fato, a primeira condenação de militares e policiais vinculados com o regime de ditadura uruguaio. Foi sentenciada por um juiz e estava vinculada com fatos delitivos no marco da Operação Condor. Naquele ano, o juiz Luis Charles, condenou seis ex-militares e dos ex-policiais por 28 crimes entre eles os homicídios, contra os militantes do PVP sequestrados em Buenos Aires em 1976. Em outubro desse mesmo ano, outro processo do Condor condenou o ex ditador Gregório Álvarez e outros acusados, por 37 homicídios de militantes uruguaio que foram exiliados na Argentina entre 1977 e 1978.

Em 2010, um dos acusados foi processado e responderia pelo crime de desaparecimento forçado e não por homicídio (como havia se utilizado anteriormente). Depois, esse processo foi arquivado devido a morte do único acusado, no entanto, por primeira vez se tipificou como crime de desaparecimento forçado e não como de homicídio. Essa tipificação foi ratificada na apelação em 2011.

Tabela 1 – Processos no Uruguai vinculadas com a coordenação repressiva

Verde = sentença

Amarelo = sumário

Laranja = pre-sumário

Violeta = arquivado

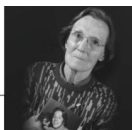
⁴ *Luchas contra la impunidad. Uruguay 1985-2011*. Gabriela Fried, Francesca Lessa, compiladoras. (Trilce: Montevideo, 2011), <http://www.trilce.com.uy/pdf/luchas%20contra%20impunidad.pdf>





	Caso # Expediente Judicial Folha de rosto	Data da apresentação	# vítimas	# Acusados	Crime (s) e data(s)	Estado processual	Países Condor
1	Anatole d Victoria Julién	2008	2		Desaparecimento forçado, Sequestro de menores 1976	Pré-sumário	ARG URU CHI
2	Antonio Viana	2011	1		Tortura 1974	Pré-sumário	ARG (pre) URU
3	Edison Inzaurrealde y Nelson Santana	28/05/2007	2	1	Desaparecimento forçado, Privação de liberdade 1977	Arquivado devido a morte do acusado	PAR ARG URU
4	Fusilados de Soca	2006	5		Morte, sequestro de menores e cambio de identidade 1974	Pré-sumário	ARG (pre) URU
5	GAU	2007	37	2	Morte, Desaparecimento forçado, Traslado clandestino 1977 e 1978	Sentença (2009) 2 condenações	ARG URU
6	Hector Giordano	2016	1		Desaparecimento forçado 1978	Pré-sumário	ARG URU
7	Maria Claudia Gelman	19/06/2002	1	5	Apropiação de menores, Desaparecimento forçado 1976	Sumário	ARG URU
8	Montoneros	30/04/2012	22		Apropiação de menores, Tortura, Sequestro, Desaparecimento forçado, Privação da liberdade, Associação para Dilinear, Sustracción de menores 1977	Pré-sumário	URU ARG





9	Orletti (“primeiro voo”)	12/04/1984	25		Tortura, Morte, Sequestro, Desaparecimento forçado 1976	Presumário	ARG URU
10	Orletti (Soba e outros)	2006	28	8	Desaparecimento forçado, Privação de liberdade 1976	Sentenças (2009) 8 condenações	ARG URU
11	Universindo Rodríguez e Lilián Celiberti	22/02/1984	4		Tortura, Sequestro, Privação de liberdade 1978	Presumário	BRA URU
12	Washington Barrios	19/09/2005	1	1	Privação de liberdade 1974	Acumulada a causa do Orletti (Soba e outros)	ARG URU
13	Zelmar Michelini	1985	4	2	Morte 20/05/1976	Sentença (2011) 1 condenação	ARG URU

3 *Discussão no Workshop*

No *workshop*, depois de uma introdução, nos dividimos em dois grupos de trabalho de vinte pessoas, sob a responsabilidade da consultora Lorena Balardini, da Dra. Francesca Lessa (Oxford), e o outro grupo com María Florencia González (Min Jus Chile) y Raúl Olivera (OLI). Em cada grupo, a discussão girou sobre três assuntos principais:

1. *Construção jurídica dos crimes transnacionais da Operação Condor;*
2. *Equipes e recursos necessários para investigar os crimes transnacionais da Operação Condor;*
3. *Acesso às provas (arquivos, informação, testemunhas) e comunicação entre os juízes, membros do Ministério Público, advogados e organismos de Direitos Humanos.*

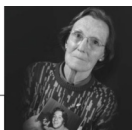
1 *Construção jurídica dos crimes transnacionais do Cóndor*

Em relação a este primeiro tema, foram abordadas questões vinculadas com a existência de códigos penais e processais orientados para a persecução penal de fatos criminais isolados e pontuais, não de crimes sistemáticos; e a relação do direito nacional com os tratados internacionais. Em particular, considera-se as seguintes problematizações:

Legislação processual não pensada para este tipo de julgamentos e o papel das vítimas

No Uruguai e no Chile, os modelos penais que se utilizam na investigação das violações dos direitos humanos (no marco da Operação Condor ou não) provém de códigos penais que





investigam os crimes comuns e, não os crimes sistemáticos. Por isso, os modelos penais à disposição dos operadores judiciais não são suficientes para avançar em investigações completas sobre crimes de natureza tão complexa. Além disso, o fato de ter que no momento do julgamento, dar atribuição desses crimes como crimes comuns, tem como resultado penas muito baixas nas sentenças, que não refletem a gravidade e a importância dos crimes cometidos.

Também se destaca que tanto no Uruguai como no Chile, a tarefa de recopilação e apresentação de provas nos julgamentos sempre estiveram sob responsabilidade das vítimas. O problema, é que isso tem feito com que as vítimas assumam esse tipo de responsabilidade sem que o Estado desempenhe o seu papel nesse sentido. Muitas vezes, as vítimas devem prestar depoimento, e esse fato faz com que haja um processo de revitimização das vítimas causando também problemas de recursos financeiros e de tempo. As vítimas devem contribuir com as provas, e dessa forma, não podem ter um papel ativo nas causas.

No Uruguai, não existe a figura do *querelante* como na Argentina. Por essa razão, quer se promover um projeto de lei para a participação das vítimas nas causas judiciais.

Além da invisibilidade das vítimas no processo penal em si, existe também a invisibilidade de gênero nos modelos penais aplicados. Um exemplo disso, foi o processo de violência sexual movido por 28 mulheres em Montevideo em 2011, não obstante, a juíza solicitou o processamento, muito tempo depois, apenas em 2016. Foi um processo por privação de liberdade, que não incluiu nem a tortura nem o estupro. A promotora apelou para que no processo fosse considerado que o acusado deveria ser julgado também por tortura.⁵

Direito internacional e direito nacional: tipificação dos crimes e prescrição

Desde 2006, existe, existe na legislação nacional uruguaia, os crimes de desaparecimento forçado e de tortura, assim, alguns promotores e juízes afirmaram que esses crimes poderiam servir para ser aplicados na investigação dos crimes da ditadura e do Condor.

Apesar de ser ultrapassada, a Constituição do Uruguai tem o artigo 72 que permite integrar os tratados internacionais ao direito nacional. Por isso, a base legal de poder aplicável ao direito internacional no Uruguai não é o problema principal, senão a interpretação que é levada a cabo pelos operadores judiciais quando tem que enfrentar e resolver a este tipo de crimes e investigações. Alguns deles, têm lutado ao longo dos anos para sustentar que os tratados de direitos humanos devem ser aplicáveis no país com o fim de poder esclarecer os crimes cometidos. Apesar disso, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) tem desqualificado em todos os casos o pedido de tipificação do crime de desaparecimento forçado, utilizando as qualificações de privação de liberdade ou de homicídio. É uma batalha jurídica que continua.

⁵ “Fiscal apeló procesamiento de ex militar Lucero por “privación de libertad,” *Busqueda*, 24 de mayo de 2016, <http://www.busqueda.com.uy/nota/fiscal-apelo-procesamiento-de-ex-militar-lucero-por-privacion-de-libertad-afirma-que-tambien>





Além da tipificação do crime, outro tema vinculado com o direito internacional é a qualificação de crimes de lesa humanidade. Atualmente, a prescrição como instrumento de extinção da ação penal é um tema de debate no Uruguai. A aplicação da prescrição prevista para crimes comuns deveria ser aplicada nestes casos, ou se a primária a imprescritibilidade disposta desde o direito internacional. Nesse sentido, a Promotoria do Uruguai, está pensado em duas possíveis soluções, que não são complementares, mas ambas são planejadas como uma forma de garantia. Uma é a suspensão do prazo de prescricional; e a outra é a imprescritibilidade dos crimes.

A primeira posição é constituída por uma postura limitada, que não aborda adequadamente o fenômeno dos crimes de lesa humanidade, porque não os considera como crimes imprescritíveis. Tem como sustentação à vigência da *Ley de Caducidad* regida nos anos de 1986 a 2011, o prazo prescricional somente tem de ser computado a partir de 2011 em diante, porque somente depois dessa data se deu as condições de exercer a persecução penal. A segunda aceita a qualificação desses delitos como crimes de lesa humanidade, e, por isso, nunca devem estar sujeitos à prescricional. O sistema judicial reage de forma diferente a essas posições. Por um lado, as instâncias judiciais inferiores são mais favoráveis às posturas do direito internacional e da imprescritibilidade; a SCJ e a apelação são menos permeáveis aos argumentos do direito internacional. Particularmente, a SCJ sustenta uma posição antiquada e conservadora em relação ao tema.

2 *Equipes e recursos para investigar os crimes transnacionais do Condor*

Em relação ao segundo tema, são considerados aqueles vinculados com a importância de criar equipes multidisciplinares para obter êxito nas investigações desses crimes e, dessa forma, melhorar as redes formais que permitam a troca de informações como política de estado. Em particular, considera-se as seguintes problematizações:

Falta de vontade de investigar e falta de políticas de estado

No caso do Uruguai, é urgente ter uma estratégia concreta para avançar com as investigações nacionais dos crimes, e também, nesse aspecto o Estado deve participar. Muitos dos participantes salientaram que a política de Estado é inexistente para estes temas no país. A necessidade de gerar vontade política é fundamental para avançar com as investigações. Em primeiro lugar, a recopilação de informação além de não ser aproveitada, também não se utiliza de forma correta e adequada.

As mudanças do Governo, também são responsáveis pelas mudanças nas políticas públicas, assim é importante que exista também uma visão do Estado na matéria presente, e que esta seja persistente e se mantenha independentemente do partido político que está no governo.





Um ex promotor salientou que a cooperação com os colegas argentinos foi fundamental para contribuir com dados, informação dos expedientes, e para diligenciar os exorto quando investigaram os crimes do Condor contra os cidadãos uruguaios na Argentina. No entanto, tudo isso se conseguiu através das redes informais, e pelos esforços pessoais e, não por contar e receber recursos e apoio do Estado uruguaio.

Outro advogado relatou que tiveram uma colaboração mínima por parte das autoridades uruguaias ao apresentar denúncias de vítimas da operação Condor argentina no Uruguai. No entanto, esse relato acabou tendo uma repercussão negativa inclusive na Embaixada argentina, a qual estava disposta a colaborar, e com esse relato, isso não foi possível. Os participantes concordaram que era necessário desenvolver redes formais para que os funcionários públicos pudessem fornecer informações para incorporá-las às causas. Sustentaram a posição que não era possível continuar trabalhando somente contando com a boa vontade das contrapartes dos outros Estados e de maneira informal. Sendo sumamente necessário gerar mecanismos que permitam intercambiar informações, fazer consultas e monitorar os tempos de resposta. Existem vários memorândum de entendimento sobre o intercâmbio de informações como o *Memorandum de Entendimiento entre a República Argentina e República Oriental do Uruguay para o Intercâmbio de Documentação para o Esclarecimento de Violações Graves aos Direitos Humanos* de dezembro de 2012. Tais convênios e redes de cooperação deveriam ser fortalecidas e ser aproveitadas de uma maneira melhor.

Equipes multidisciplinares

A principal recomendação foi fazer equipes multidisciplinares para poder apoiar as investigações, nos quais participem médicos forenses especializados, antropólogos, advogados, historiadores, psicólogos, etc. Atualmente, as equipes formadas não cumprem com os requisitos. Em particular, podemos destacar a Equipe do Ministério do Interior no Uruguai. Na Argentina, por exemplo, foi necessário gerar equipes interdisciplinares onde se permitisse ler todos os antecedentes que faziam parte das investigações. Ainda que o testemunho fosse o eixo central das provas, encontrar novas provas documentais obrigou os atores a superar novos desafios, que finalmente acabaram por forma equipes interdisciplinares.

Outro tema que também surgiu em relação ao Uruguai, é que não existe o acompanhamento as vítimas. Isso, acaba gerando um processo de revitimização das mesmas em muitas ocasiões. É necessário a institucionalização do acompanhamento, isso, pode-se lograr em parte, incorporando a estas equipes de trabalho psicólogos e assistentes sociais.





3 *Acesso às provas e comunicação entre os juízes, promotores, advogados e organismos de DDHH*

Em relação ao terceiro e último tema foram examinadas as seguintes problematizações:

Acesso à informação e aos arquivos

Vários participantes ressaltaram a dificuldade de ter acesso à informação e principalmente aos arquivos. Não existem mecanismos reais que garantam o acesso à informação. No Uruguai, o Estado fez muito pouco nesta área e esse pouco que se conseguiu foi graças ao esforço da sociedade civil. Por exemplo, a Secretaria dos Direitos Humanos para o Passado Recente (SDHPR), respondeu a muitos exorto e, também participou em 6 causas internacionais, fornecendo a documentação. A documentação e os relatórios periciais do SDHPR, para identificar de de que tipo de informação se tratava, ofereceram um corpus sistematizado que permitia relacionar a lógica repressiva do Estado indo além do caso a caso. Também acompanharam os depoimentos que eram solitários nas vozes dos sobreviventes.

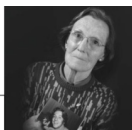
É possível que a lógica dos juízes esteja mais enfocada nos depoimentos do que na explicação historiográfica. No entanto, a documentação fornece elementos convincentes para ajudar a formar a opinião dos juízes. Em relação a função de fornecer a documentação, um perito sublinhou os seguintes problemas e dificuldades práticas: (a) os exorto chegou de diferentes canais e isso gera dificuldade para instrumentar a resposta; (b) a autenticação dos documentos pelo Cartório Geral da Nação; esse processo é feito um a um, ainda que sejam 100 processos, se gasta muito tempo; (c) dificuldade de acesso à informação dos processos para que possam ser usadas em outros países.

No Uruguai, há *directórios* sobre 19 arquivos e três leis que regulamentam o tema dos arquivos. O que falta é um protocolo de acesso aos arquivos, porque até agora os investigadores e os advogados quase não têm podido consultar e utilizar esta documentação. No Brasil, a Ordem dos Advogados tem 500 mil documentos digitalizados sobre diversos temas de interesses para a ordem profissional. A Comissão de Anistia e a Comissão de Mortos e Desaparecidos também digitalizaram informações que foram recopiladas, e, que talvez possa servir como base para gerar uma cooperação em matéria de digitalização de documentos.

Falta de especialização e capacitação

Nesta área, duas questões, em particular, tiveram destaque. Por um lado, uma funcionária do Ministério de Relações Exteriores (MRREE), salientou a necessidade de dar capacitação para os funcionários públicos que tiveram que trabalhar neste tema, para conscientizar e sensibilizar os funcionários. No caso do Ministério de Relações Exteriores, a





transnacionalização da justiça requer que os funcionários diplomáticos estejam à altura desta tarefa. Por exemplo, as Relações Exteriores tiveram um papel importante no julgamento Condor que acontece na Itália. Por isso, o funcionário que recebe a testemunha deve ter sensibilidade e conhecimento, e, que isso não seja algo só da sua própria boa vontade, senão por ter tido um curso de capacitação em direitos humanos. Por outro lado, muitos participantes destacaram que na justiça do Uruguai não há investigadores, nem promotorias especializadas, pois são os próprios funcionários responsáveis pelos crimes comuns os que investigam os casos de crimes de lesa humanidade.

Em geral, existe, portanto, uma falta de especialização nestes temas e não há instituições equivalentes, como, por exemplo, a *Procuradoria de Crimes contra a Humanidade* do Ministério Público Fiscal da Argentina. Em outubro de 2015, no Uruguai, foi criada a Unidade Especializada em Direitos Humanos,⁶ para dar capacitação aos promotores sobre o contexto histórico e político da ditadura. Apesar de que seja um passo importante, não parece ser suficiente, e, além dessas capacitações históricas e políticas, devem ser estabelecidas estratégias e linhas institucionais de investigação e cursos de capacitação e treinamentos sobre os crimes para investigar.

4 *Passos a seguir*

Depois do trabalho em grupos, todos os participantes se reuniram em uma sessão plenária onde chegaram a um acordo em relação as **duas recomendações seguintes** e propostas para agilizar a investigação e o julgamento dos casos Condor:

1. Criação de ***equipes dedicadas a investigar os processos de direitos humanos***: estas equipes podem ser criadas no interior das varas judiciais, e de outros órgãos judiciais que intervenham nos processos, inclusive no interior do Programa de Direitos Humanos. Dada a natureza dos crimes, além de contar com pessoal desses órgãos, deverão ser multidisciplinares, com a participação, em especial, de historiadores e analistas de arquivos, para apoiar a investigação documental dos fatos, e, possivelmente, de psicólogos, para o acompanhamento com as testemunhas e as vítimas.
2. Estabelecer ***uma base de dados ou repositório***, em nível regional, que contenha informações sobre as causas produzidas em cada Estado e permita a interação e transferência dos documentos entre os juízes e procuradores. Isso requer a digitalização e a compilação dos documentos e arquivos, e coordenar formas de acesso à informação.

Tradução: Fernanda Teixeira

⁶ “La suma de los factores,” *La Diaria*, 30 de octubre de 2015, <http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/10/la-suma-de-los-factores/>

